



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
Escuela de Post Grado

Maestría en Derecho y Ciencias Políticas

TESIS

LA RELACIÓN LESIVA ENTRE EL PROCESO DE VIOLACIÓN
SEXUAL Y LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DURANTE EL AÑO 2016.

Para Optar el Grado Académico de :
MAESTRO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Mención en Derecho Penal

AUTORA

Abg. VILLAVICENCIO ROJAS, Angelica Maria

ASESOR

Dr. ESPINOZA ZEVALLOS, Jose Rodolfo

Huánuco – Perú
2019



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
<http://www.udh.edu.pe>

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CC.PP.

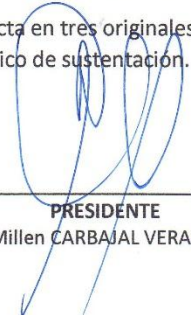
ACTA DE SUSTENTACIÓN DEL GRADO DE MAESTRO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

En la ciudad de Huánuco, Auditorio de la Universidad de Huánuco, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las 19.00 horas, los Jurados, docentes en la Universidad de Huánuco, **Dr. Millen CARBAJAL VERAMENDI, Presidente, Mg. Alfredo MARTEL SANTIAGO, Secretario, y Mg. David BERAÚN SÁNCHEZ, Vocal**, respectivamente; nombrados mediante **Resolución N° 318-2019-D-EPG-UDH**, de fecha veintiséis de junio del año dos mil diecinueve y la aspirante al Grado Académico de Maestra en Derecho Penal, **Bach. Angelica Maria VILLAVICENCIO ROJAS**.

Luego de la instalación y verificación de los documentos correspondientes, el Presidente del jurado invitó a la graduando a proceder la exposición y defensa de su tesis intitulada. **"LA RELACIÓN LESIVA ENTRE EL PROCESO DE VIOLACIÓN SEXUAL Y LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DURANTE EL AÑO 2016"**, para optar el Grado Académico de Maestra en Derecho y Ciencias Políticas con mención en **Derecho Penal**.

Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, luego el Presidente del jurado comunicó el resultado, habiendo obtenido la nota **cuantitativa** de BUENO con la calificación **cuantitativa** de 15 (en letras) QUINCE; al mismo tiempo recomendó a la Escuela de Post Grado, se le otorgue el grado académico de **Maestra en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Derecho Penal**, a la graduando **Bach. Angelica Maria VILLAVICENCIO ROJAS**.

Se suscribe la presente Acta en tres originales y siendo las 20.30 horas, se da por concluido el acto académico de sustentación.



PRÉSIDENTE
Dr. Millen CARBAJAL VERAMENDI



SECRETARIO
Mg. Alfredo MARTEL SANTIAGO



VOCAL
Mg. David BERAÚN SÁNCHEZ

DEDICATORIA

Dedico la presente investigación a mi esposo y mis hijos
por colaborar constantemente en el apoyo emocional a fin de lograr mis metas
personales.

AGRADECIMIENTO

Agradecer muy cordialmente al Dr. José Rodolfo Espinoza Zevallos, por su valioso tiempo en la guía y desarrollo de la presente tesis, la cual me permitió tener un enfoque más humano de los investigados procesados por violación sexual, evidentemente es difícil tener una visión objetiva donde no interfieran aspectos subjetivos, ello me demuestra de manera personal, que si a mí como abogada y madre, se me es complicado dejar de lado sentimientos a fin de ser objetiva, esto también debe pasar por la psiquis de los fiscales y jueces.

ÍNDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
RESUMEN	VI
ABSTRACT	VII
INTRODUCCIÓN	VIII
CAPÍTULO I	
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
1.1 Descripción del problema	09
1.2 Formulación del problema	12
1.3 Objetivo General	13
1.4. Objetivos específicos	13
1.5 Trascendencia de la investigación/justificación de la investigación	13
CAPÍTULO II	
Marco Teórico	
2.1 Antecedentes de la investigación	15
2.2 Bases teóricas	19
2.3 Definiciones conceptuales	54
2.4 Sistema de hipótesis	58
2.5. Sistema de variables	59
2.5.1 Variable independiente	59
2.5.2 Variable dependiente	59

2.6 Operacionalización de variables	59
CAPÍTULO III	
Marco Metodológico	
3.1 Tipo de investigación	61
3.1.1 Enfoque	61
3.1.2 Alcance o nivel	61
3.1.3 Diseño	62
3.2 Población y muestra	62
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	63
3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información	63
CAPÍTULO IV	
Resultados	
4.1 Relatos y descripción de la realidad observada	65
4.2 Entrevistas y estadígrafos	65
CAPÍTULO V	
DISCUSIÓN DE RESULTADOS	
5.1. Contrastación de los resultados	76
Conclusiones	84
Recomendaciones	85
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	86
ANEXOS	89

RESUMEN

La presente investigación está compuesto de siete capítulos LA RELACION LESIVA ENTRE EL PROCESO DE VIOLACION SEXUAL Y LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DURANTE EL AÑO 2016, realizando un enfoque del tipo de investigación Explicativo- Correlacional, ya que se describirá y explicara las causas que generan la transgresión del principio de presunción de inocencia, en la sentencia condenatoria por el delito de violación sexual, emitidos por los jueces del colegiado de la provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016, con nivel Explicativo- Correlacional

Con un diseño de investigación, no experimental en su variante, trasversal y longitudinal será transversal porque la investigación es de tipo descriptivo y explicativo, donde se aplicarán encuestas y análisis de sentencias, a profesionales del Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, asimismo se utilizaran expedientes relacionados con la violación sexual.

Palabras Claves:

Violación, principio, inocencia, debido proceso, administración de justicia.

ABSTRACT

The present investigation is composed of seven chapters THE RELATIVE RELATIONSHIP BETWEEN THE SEXUAL VIOLATION PROCESS AND THE TRANSGRESSION TO THE PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE, PROVINCE OF CORONEL PORTILLO, DURING THE YEAR 2016, making an approach of the type of Explanatory-Correlational research, since will describe and explain the causes that generate the transgression of the "principle of presumption of innocence", in the conviction for the crime of rape, issued by the judges of the collegiate of the province of Coronel Portillo, during 2016, with a level Explanatory-Correlational.

With a research design, not experimental in its variant, transversal and longitudinal will be transversal because the research is descriptive and explanatory, where surveys and analysis of judgments will be applied to professionals of the Collegiate Court of the Superior Court of Justice of Ucayali, Also, files related to rape will be used.

Keywords:

Rape, principle, innocence, due process, administration of justice.

INTRODUCCIÓN

Los delitos de violación sexual se han convertido la noticia más rentable para los medios de comunicación masivos, donde a su vez presentan a los presuntos responsables como un fenómeno despreciable, que sin lugar a dudas genera una sentencia por el control social, que a su vez repercute en las agencias de poder, los cuales pierden objetividad al momento de administrar justicia.

La falta de objetividad genera una afectación al principio derecho de presunción de inocencia, donde que el sujeto activo, ya no es trato como presunto, si no como un sujeto que si consumo el delito, y donde la estrategia de investigación está enfocado a demostrar su culpabilidad, dejándose de lado la visión objetiva que el titular de la acción penal actúe con objetividad obteniendo pruebas de cargo y de descargo.

Veremos en el transcurso del desarrollo de las bases teóricas para aterrizar finalmente en la comprobación de la realidad, donde las bases teóricas nos demostraran un panorama claro de las herramientas procesales que tiene el sistema para investigación, que en la práctica toman una forma material de herramientas lesivas, tales como la prisión preventiva y la valoración inadecuada de las pruebas, esto sin lugar a dudas, que si las agencias de poder no tiene un enfoque claro de constitucionalidad, solo promoverá ilegitimidad e ilegalidad.

CAPITULO I

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción del problema

En la presente investigación se pondrá en evidencia, como en todo el proceso penal, se lesiona directamente sin mascarar el derecho fundamental a la presunción de inocencia por las agencias de poder, en donde la sola declaración de la presunta víctima se vuelve en la única prueba de cargo o de imputación en el delito contra la libertad sexual, lo cual ha generado que en muchos casos que se llegue a la necesidad de forzar la declaración del perjudicado como prueba de oficio instaurado por el Juez, ya que dentro de la mente el juez, se recrea una espectro un criminal con características endógenas en la realización del hecho ilícito, generándose en la psiquis de los operadores de justicia la siguiente hipótesis ¿Quién más que la víctima para poder esclarecer la escena del crimen?, si bien tal conjetura es viable, este tipo de pruebas deben respetar los estándares de valoración, respetándose los principios como el contradictorio, la publicidad y oralidad, así también las reglas de la lógica, ciencia y las máximas de las experiencias, pero sobre todo que existan pruebas convergentes entre ellas que nos permitan arribar a una inferencia lógica, pero justa.

No cabe duda, que se ha generado un etiquetamiento y consecuentemente una estigmatización a gran escala donde los

varones, son potencialmente más propensos a cometer ilícitos penales, siendo los medios de comunicación masivos y con fines puramente económicos que se encargan de reeducar en negativo la mente de la ciudadanía, haciendo ver que una persona que cometió un ilícito, específicamente el de violación sexual es un ser despreciable, asqueroso, repudiable, generándose una conciencia social en merito a las agencias de poder, que los varones que se encuentran vinculados a los delitos de violación sexual es altamente probable que si lo cometió, donde que la agencia judicial, intenta mantenerse jurídicamente imparcial, pero en el pasar de los días, termina cediendo a los fines lesivos de las agencias de poder, promoviendo una pena de internamiento hacia adentro. El sistema penal actual olvida, que para que el delito exista no solo se debe estudiar al criminal, sino también el crimen, la víctima y el control social, siendo que en la actualidad no cabe duda que el estudio para comprender, porque de la existencia de las conductas desviadas no solo se limita a la pareja criminal, sino que es el propio sistema quien promueve la comisión de hechos ilícitos a fin de mantener vigente su discurso jurídico penal, generando penas más drásticas y limitativas de derechos.

En tal sentido, se examinara diversos factores entre ellos los testimonios del agraviado y entre otros factores, que influyen en la afectación del principio de presunción de inocente del investigado y en qué momento estos se convierten en ambiguos, temerosos, endeble

e inconsistentes, generando una prueba caótica sin respaldo de certeza fáctica; razón suficiente para no generar convicción en el dictaminador. Además, se analizará porque la declaración del agraviado en el Juicio Oral, se convierte en la única prueba para sentenciar en un proceso por violación sexual, generando con ello, una vez más la afectación al principio de imparcialidad y al derecho de presunción de inocencia.

El principio de presunción de inocencia, tiene dos variantes, la primera de carácter general un valor y la segunda una específica en el proceso penal, reflejándose como una garantía de alto rango para el procesado, que solo podrá ser quebrantado con pruebas obtenidas constitucionalmente respetando el debido proceso.

Por ultimo no cabe duda que el Estado peruano, cuenta con un derecho penal de represión y retribución con fines de exclusión hacia adentro donde que el imputado o investigado en la mayoría de casos por no decir el 100% son varones, en la actualidad todo varón es potencialmente un delincuente, el Estado se ha encargado de sembrar el miedo en la ciudadanía, donde las agencias de Poder cumplen en rol informativo, manipulativo, lo ideal sería que el poder se use en favor de los hombre, pero en la realidad, dicho accionar es contrario, resulta paradójico que el hombre ha creado para fines legitimadores pero en la practica el Estado damnifica, propiciando una difusión de reproche y miedo, donde los responsables de administrar justicia, aprecian con

ojos de culpabilidad a un sujeto vinculado al delito de violación sexual, olvidando que la constitución y los tratados internacionales, ponderan los derechos fundamentales a la libertad, garantizado por el principio fundamental presunción de inocencia, dicho principio se ve afectado directamente ya que en la mayoría de casos donde el fiscal requiere prisión preventiva estos inmediatamente son reclusos al centro penitenciario, medida que no obedece a fines cautelares, sino con criterio de sentencia adelantada en obediencia sumisa al poder estatal y el control social.

1.2. Formulación del problema

Problema General.

¿Cuál es la relación existente entre el proceso de violación sexual y la transgresión del principio de presunción de inocencia en la provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016?

Problemas Específicos.

- A. ¿Cuáles son las causas del proceso por el delito de violación sexual que generan la transgresión del principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016?
- B. ¿De qué manera el proceso por el delito de violación sexual transgrede el principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016?

1.3. Objetivo General.

Determinar cuál es la relación que existe entre proceso de violación sexual y la transgresión del principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.

1.4. Objetivos Específicos.

- A. Identificar, cuáles son las causas del proceso por el delito de violación sexual que generan la transgresión del principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.
- B. Explicar de qué manera el proceso por el delito de violación sexual transgrede el principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.

1.5. Trascendencia de la investigación/justificación de la investigación

- Nivel Social.- Permitirá que la sociedad, trate a una persona procesada por el delito de violación sexual como un sujeto de derecho, que se encuentra en una investigación y no como un responsable penalmente, esto permitirá que los ojos del control social, eviten tratar al presunto responsable como un monstruo, estigmatizándolo y excluyéndolo de la sociedad.
- Nivel Teórico.- El principio de presunción de inocencia, está ligado procesalmente con la libertad personal, en tanto, está reconocida en el art. 2. Inciso 2 del apartado 24 de la Constitución, este derecho subjetivo, es un valor fundamental de todo Estado constitucional de derecho, por cuanto fundamenta diversos

derecho fundamentales a la que justifica la propia organización constitucional, por tanto, ayudara a los aparatos de justifica a ponderar apropiadamente que el principio de presunción de inocencia, es una garantía y contiene un valor supremo, que está vinculado a otros derecho fundamentales, accionar en contrario, significaría no estar de un Estado de derecho.

- Nivel práctico.- Permita que el principio de presunción de inocencia se aplique como un elemento integrante de la noción Constitucional de un proceso penal justo y equitativo, ya que no se trata de cualquier garantía, en el proceso penal sino de una de las garantías, más importante de todo proceso sancionador, en tanto, se resaltara en la práctica que dicho principio es un fundamento de las garantías judiciales.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación

2.1.1. En el ámbito Internacional

SEXISMO BENÉVOLO Y VIOLENCIA SEXUAL PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS RELACIONES ÍNTIMAS, M. Mercedes Durán Segura, 2010, Universidad de Granada, para optar el grado de Doctor, arribo a las siguientes conclusiones: la tesis sobre la influencia de la ideología sexista, tendría una aplicación directa al ámbito legal en la toma de decisiones judiciales sobre la violación, nuestros resultados podrían suponer una contribución en el asesoramiento de miembros del sistema judicial acerca de la existencia e influencia de estas variables ideológicas (y las relacionadas con el tipo de relación víctima agresor) que distorsionan la percepción de la violación sexual, las valoraciones que se hacen en relación con estos delitos y sus tratamientos judicial. Con ello, tal vez conseguiría un tratamiento más sensible por parte del sistema judicial para las víctimas que evitaría la innecesaria victimización secundaria que muchas de ellas sufren. Todo ello repercutiría en un mejor abordaje y erradicación de la violencia de índole sexual, con la consecuente disminución del “justice gap”.

Comentario y análisis de profundidad de acuerdos a los objetivos

Resulta más que evidente el estigma social y sentencia delante de la opinión pública cuando una persona es procesada penalmente, lo mismo sucede por los órganos responsables de investigar ya que desde actos iniciales la presunción de inocencia es quebrantada por un estigma social.

2.1.2. En el ámbito nacional y local

APRECIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE LOS VIOLADORES DE MENORES, Elvis Jorge Alcalde Muñoz, 2007, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado de Maestro en Derecho mención en Ciencias Penales, llego a las siguientes conclusiones:

- Los violadores sexuales de Menores son sujetos con alteraciones de conducta productos de fuertes impactos emocionales durante su infancia y/o adolescencia por ejemplo abandono físico o moral, maltrato, malos ejemplos, educación deficiente, etc. Aunado a esto también presentan ciertos rasgos discociales, inmadurez en el desarrollo de su personalidad, e inteligencia promedio. Es de resaltar que no presentan enfermedad mental y que existen también ciertas circunstancias que activan su

instinto sexual agresor, como es la pobreza, el bajo nivel valorativo, presencia de material pornográfico, hacinamiento, y vida promiscua. Sin embargo, es necesario precisar que se nos hace difícil poder etiquetar a estos agresores con ciertas características comunes-únicas en todos los casos, sino que los principales caracteres que hemos señalado a lo largo del presente trabajo interactúan en estos agresores, por lo que hemos dejado sentada las características más resaltantes de estos agresores sexuales de menores, dando así respuesta a la interrogante planteada al inicio de la investigación. De otro lado expresamos que estamos de acuerdo con las modernas tendencias criminológicas, en cuanto se expresa el tema multifactorial como punto de partida para explicar la acción criminal. Creemos que no es importante el nombre que se le ponga a la Teoría en mención, sino que sepa tratar el tema criminal desde varias aristas y de manera comparativa, debido a que así nos lo exige la moderna criminalidad de hoy en día.

Comentario y análisis de profundidad de acuerdos a los objetivos

Se advierte que en la mayoría de casos el delito de violación sexual fue producto del entorno o del desarrollo

del proyecto de vida del agresor, en tal sentido lesionar el principio de presunción de inocencia, sin evaluar factores de personalidad o mental, aunque se vea benevolente es estigmatizar a un ser humano que posiblemente sufra de salud mental.

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y PSICOSOCIALES EN HUÁNUCO, Huaranga Chuco Odeny Moner, 2016, Universidad de Huánuco, para obtener el grado de Maestro mención en Derecho Procesal”

- El Estado no cumple con su deber tuitivo de la indemnidad sexual del menor de edad durante el proceso del ilícito, por lo que la víctima se ve afectado por la revictimización (lentitud del proceso; se le insiste con reiteradas declaraciones por parte de los operadores de justicia, y a veces sin Cámaras Gesell, que no se disponen en todas las instancias del Distrito Judicial de Ucayali; frustración de las expectativas de la víctima cuando al final del proceso no se llega a la condena; la participación de los sujetos relacionados con el proceso penal esta canalizado directamente en el cumplimiento de procesos ambiguos y burocráticos para la búsqueda de la prueba ligada a una investigación criminal pueden afectar directamente el trato

brindado a la víctima lo que facilita la motivación la realización del delito de violación sexual de menores de edad en esta zona y período señalado.

Comentario y análisis de profundidad de acuerdos a los objetivos

La conclusión a la que arriba la investigación es relativa cuando señala “la actuación de los sujetos intervinientes en el proceso penal enfocados principalmente en el cumplimiento de procesos burocráticos para la búsqueda de la prueba ligada a una investigación criminal pueden llegar a descuidar el trato brindado a la víctima”, cabe resaltar que esos procesos burocráticos también afectan al imputado que es sujeto de derecho desde el inicio del procesal penal hasta su conclusión.

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Presunción de inocencia y la persecución

Angulo, A. (2014), precisó que “la existencia de la presunción de inocencia en nuestro ordenamiento, tiene una vinculación directa a nivel constitucional, entendido como un principio que obliga a desarrollar en favor de los procesados un trato y consideración de inocentes mientras no les sea probada formalmente en proceso su responsabilidad penal, tiene como consecuencia que existiendo un organismo acusador la carga de la prueba queda depositada sobre sus hombros”.

Ello tiene reflejo y expresión, en el sentido de que tal principio: “(...) deposita el *onus probandi* sobre las espaldas del acusador –público o privado—. Ello significa que la iniciativa probatoria tendiente a demostrar la verdad acerca de los hechos contenidos en la acusación, corresponde exclusivamente al órgano acusador”. Por lo referido, no interesa que la investigación, accionar o los frutos de las anteriores sean llamativos o logren convencer al ciudadano común, a las teleaudiencias o audiencias radiales, sino que el estándar debe prepararse por el fiscal, para convencer a un juez, dentro de un proceso penal formal, en el cual se activan y funcionan principios, derechos y facultades favorables al procesado y su defensa, determinando en paralelo ciertos cuidados y formalidades que se deben cumplir durante los actos de investigación, para que el producto de aquellos posea peso y legitimidad” (pp. 20-21).

2.2.1.1. El derecho a la presunción de inocencia y su regulación con la dignidad humana

El Derecho de presunción de inocencia protege a plenitud el fin supremo del Estado, la dignidad humana, la Constitución Política en su primer artículo señala claramente, que el fin supremo de la sociedad y el Estado, es la dignidad del hombre, no cabe duda que toda la ciudadanía tiene un rol constitucional frente a otros sujetos, que en puridad, el concepto constitucional es

muy fantasmal en la práctica ciudadana, en tal sentido , al existir ausencia de criterio y razonamiento las agencias de poder ejecutiva se encargan en complicidad con la sociedad de lesionar el fin supremo que el Estado constitucional, dice proteger.

La dignidad humana encuentra una posición de primer nivel normativo, en razón de su rango y concepto constitucional, pero en la práctica, dicho lugar en verdad genera una concepción ilusoria o hasta fantasmal, siendo este sin sabor jurídico gracias, al tratamiento del sistema procesal penal indiferente, mínimamente los estudiantes de derecho por sus estudios cuentan con un criterio jurídico que la dignidad es el eje central de toda creación o regulación normativa, esta conciencia jurídica debe verse más enfocado en los profesionales del Derecho, lo que en la práctica resulta completamente ilógico, por otro lado tenemos al control social, donde la diversidad de ciudadanos exigen violencia y reprehensión, generando un decaimiento en el nivel de ponderación del derecho a la dignidad, cambiándose los roles de ponderación de dignidad, y pasar a ponderar y valorar más la represión y afectación de la libertad del ser humano.

Hasta aquí podemos decir que existe un concepto distorsionado de interpretación constitucional, prefiriéndose normas de menor rango, que la propia constitucional, lo más insólito que esta situación jurídica es generado por conocedores del Derecho, sin un punto del colmo la ciudadanía de paso.

Por ello que la protección de los intereses fundamentales de la persona humana y su dignidad como complemento innato necesario, obliga a que todas las agencias de poder, procuren en la medida más lógica y razonable posible, no solo crear normas para limitarlas, sino robustecer el ordenamiento jurídico a fin de que se proteja más a la persona, el único responsable de generar tantas conductas criminales sembrando el miedo es el Estado, tipificando conductas con penas más severas sin un control criminológico, carentes de verdad y incoherentes con la realidad al momento de su aplicación, en tanto, el miedo que generan a la sociedad es su verdadero fin legitimador del Estado, haciendo ver al investigado como un monstruo horrible e incorregible, que debe ser tratado con repudio y desprecio

desde el inicio, repito existe mucha incoherencia constitucional en el trato procesal, que objetivamente no obedece a ningún fin constitucional y mucho menos procesal.

La concepción constitucional de la norma máxima, no tiene límites en cuanto al enfoque de protección, no establece modalidades de cómo o ante qué tipo de lesiones contra la persona, se debe o no proteger la dignidad y su respecto a este ser real y no ontológico, la realidad trata al investigado como objeto sin derechos, no existe la mínima intención de que esa concepción sin límites se interprete y aplique en favor del hombre de manera correcta, el Estado hasta la actualidad, así como en épocas anteriores, debió y debe brindar soluciones reales, y no solo discursivas para satisfacer el clamor social, tal parece que quienes lideran el Estado no comprenden aun, que el concepto de respeto y protección por la dignidad del hombre emitido por la constitución es de carácter obligatorio, mucho más que el derecho penal, pues el menosprecio, la humillación a nivel nacional mediante los medios de comunicación, es un claro atentado terrorista contra la dignidad hu-

mana, lo antes dicho es la práctica diaria a nivel procesal, lo cual no significa que no existan otras formas de atentar la dignidad, siendo que la desigualdad, la pobreza, la exclusión son causas claras de afectación al derecho a la dignidad.

Por tanto, el principio constitucional denominado presunción de inocencia, tiene un enlace directo como madre e hijo, donde la dignidad es la madre y la presunción de inocencia el hijo, donde dicha protección es necesaria en todas sus extensiones deber ser protegida por el Estado.

2.2.2. El principio procesal llamado presunción de inocencia

Desde su enfoque procesal, la concepción valorativa aplicativa está dirigida al Juzgador y al titular de la acción penal, quienes representan al poder judicial, debiendo ser estos los ultimo en ser contaminado con el ideal social, debiendo primar el valor jurídico constitucional de protección al hombre, digo debiendo ser el último en ser contaminado, ya que en la práctica se ha visto que si bien existen procesos judiciales, estos desde sus actos iniciales están plagados de etiquetamiento y estigmatización, por tanto si bien el juzgador hace intentos desmesurados por dejar de lado los comentarios, críticas y emociones del control social, en

pocos casos su criterio de discrecionalidad predomina ante tanta presión social, el juzgador debe procurar hacer una aplicación, valoración e interpretación con rango constitucional, mas no con fines penales, pues no cabe duda que el crimen es producto del Estado, en tanto, se debe tener mucho cuidado en cometer arbitrariedad, so pretexto que el A quo asuma que cualquier error judicial, deberá ser corregido por el A quen, o hasta en el peor de los casos, asumir desde el enfoque normativo, como última medida el recurso de revisión como salvavidas de libertad mas no de la dignidad, pues esta ya no se puede recuperar una vez afectada, precisaba como salvavidas de ultima ratio al recurso de revisión ya que en su propio presupuesto de admisibilidad reconoce que cuando una norma es que privo de libertad es declarada inconstitucional, se puede revisar la sentencia firme, obviamente el resultado debería ser favorable al sentenciado inconstitucionalmente.

Pregunto es necesario esperar tanto procesalmente, para observar verdaderamente el principio de presunción de inocencia y no tratarlo como algo ontológico,

creo claramente que no, pero si la norma procesal regula la posibilidad de sentencias inconstitucionales significa que existe la posibilidad que normas penales y procesales afecten los derechos fundamentales, pese a que la propia norma reconoce la posibilidad de reparar los daños generados por errores judiciales, creemos claramente que no existe reparación ni rectificación alguna que restituya la dignidad de un sujeto, o la dignidad de su entorno personal, en la actualidad una persona puede ser privada hasta 4 años solo para ser investigada apartándolo completamente de una calidad de vida, educación, salud y trabajo, que puridad es una sentencia adelantada, o se ha visto hasta el momento alguna reparación o resarcimiento a favor de las personas absueltas en sus procesos penales donde se encontraban altamente vinculados pero que después de una investigación no se pudo demostrar verdaderamente su responsabilidad.

El responsable de todo lo antes mencionado, sin duda alguna es el legislador ordinario, preciso que es ordinario porque el verdadero capaz o hábil de generar normas es un abogado, pues fue el único preparado estudiando 6 años diversos conceptos de derecho y

sus finalidades, en tal sentido, es evidente, que ese factor humano- legislativa, es una de las causas más notorias de la ausencia de realidad en su contenido al momento de su aplicación, ello a su vez nos permite inferir que el Juzgador despliega esfuerzos sobre dimensionados en su conocimiento jurídico para tratar de adecuar y comprender, las necesidades y fundamentos del legislador, esto procurando no salirse de su enfoque social, a fin de no perturbar para quienes fueron creados tales normas procesales.

La actualidad nos muestra que el derecho a ser tratado como persona y no como delincuente en el proceso penal, es algo normal, que más haya de generar un enfoque de valoración constitucional, se genera un síndrome de afectación y humillación al ser humano, no hay delito que no sea presentado ante los medios de comunicación social, llegándose al punto de afirmar los noticieros, con su frase “si no te molesta no es noticia”, cuando el mensaje correcto es “si no genera morbo, descontrol o excitación, no vende”, esto obviamente repercute en la conciencia de la social civil y los poderes responsables de administrar justicia, impregnándose el medio en los propios juzgadores,

limitándoles su autonomía y discrecionalidad, pues un actuar contrario se observaría como una conducta rebelde ante el sistema represivo, selección y exclusivo.

2.2.2.1. El Estado Democrático vs la presunción de inocencia

El origen fundamental del derecho y principio denominado de presunción de inocencia es multiprotectora, ya que se materializa como una regla y como principio, que aunque parezca irreal a nivel internacional coinciden en su conceptualización, y que al momento de su aplicación es completamente diferentes, el CADH consecuentemente recuerda, cual son las dimensiones reales y no ontológicas de los derechos fundamentales, pero tal parece que el Estado peruano específicamente, hace una división excluyente en ambos enfoques, brindando un tratamiento completamente diferente lo regulado normativamente, debiendo ser este principio de carácter auto aplicativo y no selectivo, con fines de operativización en el proceso penal, tal parece que en esencia el Estado, transmuta las reglas a otros fines, no concordados con la realidad constitucional, que cada vez es más irreal.

Sin duda, considerar correctamente un Estado Democrático involucra aspectos internos y externos tanto políticos y normativos, en tal sentido, lo que se debe esperar de un Estado es un valor político ético, para su materialización, pero como no estamos para alardear de aspectos que el Estado no cuenta, sin duda alguna uno de los aspectos más visibles en la afectación de los derechos de las personas, es la política de severidad y criminalización de toda conducta, conforme ya indicamos viene plagado de etiquetamiento selectivo y estigma, si observamos bien el Estado actual “debe ser” pero no lo es, no lo es protegiendo al hombre en su entorno social, no lo brindar condiciones adecuadas de vida, no le brindar seguridad, no le brinda paz, por tanto lo único que brinda realmente es miedo del hombre al propio hombre, advirtiéndose un enfoque antijurídico, de cero garantía a la libertad personal y mínima protección a la persona humana, no hay duda que las características antes indicadas no son tales de un Estado democrático, siendo necesario tal vez, recordar a las agencias de poder que significa verdaderamente Estado Democrático.

Normas democráticos vs Estado democrático, tal parece que es la rivalidad actual y permanente, creo que no existe discusión que no debería existir rivalidad dentro de un Estado, siendo que los conceptos de democracia y liberalidad, debe ser convergentes y que desde el punto de vista político, se potencie y se revalorice los aspectos más importantes del individuo.

Respecto a la retroalimentación de valores en el contenido de las normas jurídicas, está claramente debe estar enfocada a la operativización del sistema penal, ya que se ha perdido los cimientos de un Estado respetuoso de los valores que encarnan la vida humana, delimitándose conceptos claro en la imputación a un presunto investigado, materializándose no solo que deba ser considerado si no tratado como sujeto de derecho en todo el proceso penal, un trato que exige una materialización real de inocencia.

Reitero que lo mediático sin control afecta gravemente los intereses de la vida del hombre, el Derecho penal en puridad es represiva, selectivo y humillante, limitando la dignidad del hombre por medio de penas y medidas de coerción, las cuales amenazan día a día

la dignidad y el respeto por la vida humana, siendo que cualquier evidencia que vincule a una persona deber considera como una prueba más, y no de otra forma, ya que esta tomara el valor de prueba como tal en la etapa de juicio oral, prueba que será sometida a un contradictoria a fin de advertir y precisar si cumple con los estándares de legalidad y licitud.

(Castillo, 2018) precisó “que el derecho penal es uno de los sistemas más enérgicos que se han construido para la protección de la dignidad, pero al mismo tiempo, es el que más intensamente amenaza a la dignidad a través de penas y medidas de coerción” (p. 43).

El mensaje de cumplimiento normativo y no solo factico, en la práctica solo se limita a un discurso o simple concepto, debiendo ser tratado el principio de presunción de inocencia de manera más sesgada y cuidadosa respecto de la esencia del hombre para limitar sus derechos, dicho principio tiene como finalidad revalorizar a más la dignidad y los derecho fundamentales del hombre, valor que se encuentra ausente en el trato del Estado y la propia sociedad

Hasta aquí es más que evidente la dependencia entre dignidad y presunción de inocencia y viceversa, en tal sentido esta no debe ser instrumentalizada en la práctica cotidiana, práctica que se evidencia con la aplicación de la medida de coerción personal llamada prisión preventiva, la cual debe ser usada en ultima ratio, ya que supuestamente existen otros medios, pero la realidad nos muestra que el sistema penal, no cuentan con otros medios alternativos eficaces y optan de manera inmediata por la más gravosa; el delito de violación sexual es un estímulo descontrolado de reproducción en la personalidad del ser humano, esto nos llevaría a preguntarnos, ¿Por qué que las mujeres no violan?, o es que acaso ellas no tienen estímulos sexuales, es evidente que también tiene estímulos sexual pero no descontrolados y este factor se debe a los propios medios de comunicación donde se vende a la mujer como carne, objeto, teniéndose como resultado morbo y excitación descontrolada, por la forma en que se las presenta. Cada delito tiene un factor, causa y estímulo, siendo este último a ser el detonante de una conducta delictiva, por la propia influencia de la sociedad con enfoques neoliberalistas.

2.2.3. La teoría del delito y el concepto de delito

(Altamirano, 2010) señaló en su “teoría sobre el delito, que es un sistema de respuestas a priori que exponen, a partir de una determinada tendencia dogmática, cuáles son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídico penal a una acción humana, para el estudio de la teoría del delito recurriremos a la dogmática, que no es otra cosa que el estudio del dogma, más específicamente la interpretación del dogma. En derecho penal, la doctrina es la ley penal, por tanto es el único principio obligatorio del derecho penal, siendo así la interpretación mencionada debe ser razonable y sistemática”.

2.2.3.1 Concepto de delito

Roxin, C. (1979) refirió que “el delito reside en la desobediencia o en su contrariedad al valor o en su dañosidad social, debe responderse, por consiguiente, en el segundo sentido. Por ello, la teoría del dolo debe rechazarse en su forma pura. Ella es "injusta" porque deja de lado una diferencia considerable a los efectos del análisis jurídico-penal, que sin embargo no es secundaria y decide sobre la punibilidad o la medida de la escala penal”. (p. 184)

2.2.3.2. La sindicación

Cabrera, P. (2011) refirió “que, por la naturaleza del sistema procesal acusatorio, no cabe la posibilidad de

existencia de la prueba plena ni la prueba legal, no es suficiente la sola sindicación hacia el imputado para reprimir; siendo en la práctica tan evidente que los sujetos faltan a la verdad procesal, con la finalidad de obtener los beneficios, determinándose este por una traslocación de los hechos o una sindicación injusta o falsa. No cabe que el fiscal tiene el deber normativo de carácter procesal y constitucional, y actuar con objetividad en la obtención de las pruebas, ya sean estas de cargo o de descargo, esto porque, el Ministerio Público, constitucional y procesalmente es el responsable de la carga de la prueba y tiene el deber de garantizar su obtención e incorporación” (p. 437).

2.2.4 Jurisprudencia respecto a la sindicación y la sindicación en el delito de violación sexual emitido por la Corte Suprema

Primera Jurisprudencia.- En el R.N. N° 1632-2005-Cusco del 28-6-2005, por homicidio calificado se imputaba al procesado Mateo Rolando Peralta Rojas en adelante imputado, que supuestamente de manera conjunta con otros 3 (sentenciados con pena efectiva por los mismos hechos), terminaron con la vida de Matilde Tacuri Tinta, el 3-7-2000 en horas de la noche, después de someter al contradictorio todas las pruebas que vinculaban al imputado este fue liberado de todo cargo pero el

actor civil fundamento su recurso de nulidad que no se había considerado las testimoniales de 4 testigos que le señalaban como responsable del homicidio.

Ante eso se procedió a llamar a los 4 testigos que presuntamente habían presenciado la escena del crimen de manera directa, una de las versión fue de una señora que en la investigación había declarado haber visto al imputado salir de la habitación de la difunta en horas de las noches, tal versión fue posteriormente desmentida por el esposo de esta testigo quien indico que ese día dejo a su esposa en su casa y no pudo haber presenciado el crimen, así mismo otras 3 personas indican haberlo visto en horas de la noche también salir de la casa de la víctima, pero habiéndose hecho la reconstrucción ocultar en horas de la noche a fin de que ratifiquen su versión, estos no pudieron mantener la versión antes otorgada, demostrándose la imposibilidad de diferenciación desde su ubicación hasta la escena del crimen.

Esto nos lleva a preguntar ¿Qué causas motivan a mentir en perjuicio de una persona y privarlo de su libertad?, sin duda pueden existir diversas causas el propio miedo generado por el Estado, buscar culpables a fin de generar una justicia personal, esta misma forma de actuar en un delito de homicidio también trastoca a los investigados por delitos de violación sexual, donde

no cabe duda que desde los 14 años hasta los 17 años hay que tener mucho cuidado con la obtención de la información y de quienes proviene la información, no cabe duda, que en los delitos de violación sexual de 10 a 13, existe mucho escarnio y repulsión, pero en puridad influye mucho la ubicación geográfica para que tales acciones sean muchas veces normales, por tanto siendo materia de investigación geográficamente Ucayali, debemos precisar que de acuerdo a nuestra realidad, una chica de 10 o 13 años fácilmente parece una chica de 15 o 16 años, la forma misma de vestir, su genética de las mujeres selváticas es diferentes al de la costa y la sierra, no cabe duda que el aspecto exterior es solo un factor que promueve esos delitos, pero tampoco se puede ser ajeno que la mayoría de denuncias por violación de 14 a 17 realmente no son actos violentos o realizados verdaderamente por personas perversas a dañar, si no, porque son su pareja o simplemente se dedican a la prostitución por la escases económica, las circunstancias son diversas sin duda.

Segunda Jurisprudencia. – Las declaraciones contradictorias de la víctima y del testigo pueden permitir inferir que existe duda razonable respecto de la responsabilidad del imputado en delito de violación sexual.

En el R.N. N° 567-2005-Huánuco del 18-5-2000: “una menor

indica haber sido violada por su padre y que tales hechos fueron presenciados por su prima, tal incidente fue denunciado por la progenitora, pero no fue ratificado posteriormente, asimismo pese a la sindicación de las menores la primera de ser víctima de violación sexual y la segunda por haber presenciado, no guarda relación con el examen del médico legista, quien emitió sus conclusiones precisando que no existe violencia y muchos menos penetración en las partes intimidad de la menor, lo que lleva a inferir, contradicción de lo declarado y la prueba científica. En el departamento de Ucayali una de las causas más usuales para denunciar violación sexual, son los celos, engaño y dañar la imagen o problemas internos en la familia, lo más grave es que se usa sin pensar como víctima a una menor, reitero que el nivel cultural y económico influye mucho en este delito, que debe ser tratado con mucha delicadeza

Tercera Jurisprudencia. – No es suficiente la sola sindicación, si a ella, no se suman otros elementos convergentes a fin de inferir que lo declarado es verdad.

En el R.N. N° 3116-2003, se confirmó una sentencia condenatoria, basado en testimonios que fueron corroborados en cada etapa del delito, cabe precisar que el delito sentenciado fue un delito de corrupción de funcionarios, donde el sentenciado favoreció en un proceso de contratación previo requerimiento de dinero, ayudar al postor a ganar la buena pro, y para ello

intervendría directamente en cada etapa del proceso de contratación, como por ejemplo la descalificación de otros postores a fin de que no generen competitividad con el postor favorecido, siendo así, las testimoniales se fueron adecuando muy cómodamente a cada etapa del proceso de selección en aplicación de las reglas de la lógica, la ciencia y la máximas de las experiencias, no cabe duda que el uso de la prueba indiciara en este delito es determinante.

2.2.5 Valoración de la declaración del agraviado

Respecto a este extremo el (Acuerdo Plenario, 2-2005) reconoció la posibilidad válida del testigo único en calidad de agraviado, siempre y cuando no se evidencien factores que invaliden tales afirmaciones. Debiendo cumplir las siguientes garantías de convicción:

- Ausencia de incredulidad subjetiva.- Que no existan ningún tipo de relación entre víctima y victimario, esto involucra aspectos subjetivos y objetivos, solo así producirá certeza.
- (legis.pe, 2017) “Verosimilitud, se logra siempre y cuando exista logicidad y coherencia, lo que permitirá arribar a una inferencia sólida para lo cual deberá estar rodeada de otros elementos convergentes y ser útil en la actividad probatoria”.
- Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señala el literal c) del párrafo antepuesto.

2.2.6. Valor probatorio de las manifestaciones prestadas en instancia preliminar

2.2.6.1 Valoración de la prueba

Arbulú, V. (2004) refirió que la aplicación metodológica de la prueba buscar evidenciar la conexión lógica entre verdad y lo falaz, muy útiles para el desarrollo del juicio y evidenciar el verdadero contenido de lo que se pretende demostrar en juicio.

El art. 393 inciso 2 de la norma procesal, precisa las reglas el juez debe utilizar para la apreciación de las pruebas, primero debe realizarlo de manera individual y luego advertir si existen otros que convergen entre ellas, siempre bajo las reglas de la sana crítica. Por tanto enfocarnos en una sola prueba nos permitirá comprender un solo aspecto, lo cual podría influir inadecuadamente la valoración integral de las pruebas obtenidas, siendo siempre necesario una valoración integral de las pruebas de cargo y de descargo, existen 2 métodos que se pueden utilizar en las decisiones judiciales: la prueba legal o tazada y la de libre valoración probatoria”. (p. 165)

El Perú se ha optado por inclinarse al sistema de libre valoración de la prueba descartando la prueba tazada,

valoración libre o discrecional que reafirme la autonomía del fiscal para acusar y del juez para resolver, que al momento de emitir pronunciamiento de fondo deberán utilizar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de las experiencias, siendo así, solo se podrá considerar que estamos frente a una valoración justa, cuando se haya respetado los lineamientos antes señalados. Por otro lado, resulta más que evidente que en los delitos de violación sexual y dada la naturaleza del bien jurídico que protege, resulta siendo un delito que genera automáticamente una concepción de culpabilidad sobre el presunto responsable, generando así una sentencia anticipada desde el ámbito social, dicha sentencia contiene un valor de estigma creado por la sociedad, en ese orden de ideas podemos decir que efectivamente es la sociedad quien ha conceptualizado determinadas conductas como ilícitas, conductas que si el ordenamiento jurídico no hubiera considerado reprochable como en otros Estados u otros momentos históricos o culturales, tales acciones serían actos normales, correctos con ciertas tendencias de inmoralidad, pero no delitos.

Por lo antes mencionado podemos decir que en la sociedad se encuentra cultivo de delitos, siendo que muchos factores externos que se encuentran en la sociedad favorecen o promueven hasta incitan a la comisión de estos delitos, no hay duda que la persona que obliga a una menor de edad a tener relaciones sexuales bajo violencia, intimidación, es una persona que no puede controlar adecuadamente sus instintos, siendo así cuando medios de comunicación difunden una noticia lo hacen sin el mayor control, tal vez en lo más profundo pretendan promover una cultura educativa o de conciencia social, pero en la realidad vemos que los resultados terminan en los extremos del morbo, aspecto que muy necesario para las grandes cadenas de comunicación cuya única finalidad como empresarios es crecer en el aspecto económico, tal crecimiento financiero se debe a informaciones deliberadas que satisfacen solo a un sector muy afectado, persona de bajos recursos que no encuentran justicia en el sistema actual.

2.2.7. El agraviado y la revictimización.

Arbulú, V. (2004) manifestó que el concepto de agraviado es definido por el artículo 94 del NCPP, precisando que es el

ofendido o el perjudicado, siendo el primero afectado por los delitos contra el honor y el segundo por cualquier tipo penal reconocido en la norma sustantiva punitiva, esta concepción de perjudicado mas no de ofendido, alcanza a otros tales como a la sucesión y socios dependiendo de la naturaleza de la persona sea natural capaz o incapaz o jurídica, siendo en este último, en algunos casos el Estado el agraviado que es debidamente representando de conformidad con la Constitución Política del Perú por los procuradores públicos, evidentemente cuando se hable de personas naturales se aplica supletoriamente el Código Civil, a fin de determinar la magnitud de los daños como el origen del valor del hombre.

Arbulú, V. (2004) manifestó que el concepto de revictimización, no está definido en la norma procesal, pero debe ser comprendida perjuicios o afectación a la parte emocional de la víctima, y sin lugar a duda este concepto se adecua más en los delitos de violación sexual en víctimas menor de edad, si bien la norma procesal establece un tratamiento a fin de que no se revictimice al sujeto agraviado, este es un simple trato procesal que emite un doble mensaje el primero el no agravio mental que se entiende como volver a vivir los hechos traumáticos o actos violentos del acto sexual, y el segundo mensaje que se asume que la víctima es 100% real y ¿qué sucede si no lo es?, tal parece que el propio tratamiento está enfocado solo en buscar

quien es el responsable afectando directamente al principio de presunción de inocente, mas no si el contenido de lo que se brinda como daño o perjuicio es real, ya que dicha labor estará a cargo de perito psicólogo quien será el que lleve a cabo el interrogatorio propuesto por las partes, perito que solo interrogara habiendo asumido un enfoque de consumación del acto, pues este sujeto carece de conocimiento de delito en esencia y teoría del caso, por tanto, si bien la legislación limita el principio de publicidad en los delitos de violación sexual de menores, esto no debe significar que se tenga un enfoque y estrategia de persecución penal de cargo a toda costa de responsabilidad en perjuicio del investigado, recordemos que la ciencia es perfecta, no es absoluta, asimismo las declaraciones están conformadas de diversas características y entre ellas está de manera predominante, la alteración y percepción de la realidad, por lo que esta regla debe adoptarse en casos muy específicos y de forma muy cuidadosa, ya que el resultado puede ser afectaciones directas a los derechos humanos y de manera específica al derecho y principio procesal presunción de inocencia. (pp. 131-132).

2.2.7. Valoración jurídica de las afirmaciones de la víctima en los delitos sexuales

Panta, D. & Somocurcio, V. (S/N), advirtió en un estudio del acuerdo plenario 2-2005, que en la mayoría de casos donde se

brinda un valor a las declaraciones del agraviado, estos han tenido confrontamiento con las concepciones constitucionales, lo cual obliga a establecer parámetros que tiene que ser establecidos por el órgano Supremo, a fin de garantizar la verdad de los hechos al momento de interpretar, que hechos son demostrados efectivamente, no cabe duda existe una desventaja entre la obtención e introducción de la prueba, ya que tal dominio lo tiene el propio Estado.

Es sencillo inferir que el delito no es una acción o conducta típica, antijurídica, culpable y reconocida por ley, sino un comportamiento diferente, con fines determinados diferentes, con donosidad a otras personas, el derecho penal y su sistema procesal actual es Draconiano, cuanto más, sufrimiento y miedo causa a las personas presuntamente vinculadas a un hecho ilícito, siendo el Estado que cuenta con una visión y misión retributiva, cuyo resultado es nula al reducir la delincuencia, más si los propios sistema de poder, se unen al discurso jurídico penal. Sin lugar a dudas tener como bases en la actualidad la severidad, incremento de penas sin criterio constitucional, propician un Estado arbitrario, y hasta genocida, que afectan directamente en los procesos penales en curso respecto a los delitos de violación sexual, el Estado debe regenerarse, ya que la política actual solo obedece a fines políticos institucionales,

mas no con fines constitucionales, no cabe duda que es todo un reto cambiar nuestra forma de pensar regenerándonos en pro de los derechos fundamentales, el sistema se afana en desprestigiar al hombre, en excluirlo más hacia dentro, sin oportunidades de ser tratado como sujeto de derecho, pudiéndose inferir entonces que el trato normativo que se le brinda al hombre, escala a niveles de poder como el propio proceso penal, donde el sujeto llega con un nivel de etiquetamiento y estigmatización, lo que afecta directamente al principio de derecho llamado presunción de inocencia, creándose el siguiente aforismo, “si la propia norma regula al hombre como un ser horrible e incorregible, porque no darle el trato de tal, en el proceso penal” obviamente tal inferencia es errada para los verdaderos hombres del Derecho., pero la practica termina oscureciendo los verdaderos principios, derechos y garantías del hombre (p. 13).

2.2.8 El testimonio de la víctima como elemento de prueba y criterios orientadores para su valoración

Lopez, E. (2017) manifestó que “la jurisprudencia nacional siguiendo a su par española, admitió que la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, siempre y cuando su declaración esté rodeada de ciertas cautelas en aquellos supuestos en los que sea esta única prueba de cargo recurrente”. (p. 63)

En tal sentido no cabe duda que la sola declaración es útil

y puede debilitar la presunción de inocencia, pero conforme ya indicamos tiene que cumplir los presupuestos de convicción señalados en el A.P 02-2005.

2.2.9 El testimonio desde el enfoque procesal de la víctima

El enfoque procesal del testimonio de la víctima, y conforme lo exigió la presente investigación, planteó “la existencia de 3 clases de testigos: los que han visto bien, pero dudan de lo que han visto. Los que han visto mal, pero creen haber visto bien, y los que no han visto nada y aseguran haber visto todo”. (Menéndez, A. 2015)

(Moreno, 2014) precisó que no existe una definición clara jurídicamente sobre testimonio, se infiere entonces que mucho menos existe una definición teórica jurídica, respecto al testimonio de la víctima, ya que los conceptos que encontramos son definiciones clásicos por “MITTERMAIER, GORPHE y BENTHAM, quienes ofrecen conceptos que parecen haber perdido muy poco o nada en la actualidad”. Sin perjuicio de ello nos dice que la Corte Suprema definió un concepto acerca “del testimonio como la expresión de los hechos percibidos por los sentidos; es un recuento de las diversas modalidades que rodean el acto y del modo como ha llegado a su conocimiento los hechos que se aseveran”.

A partir de esta definición podemos precisar que el concepto a un sigue siendo genérico, pero que de manera personal podemos afirmar que el testimonio de la víctima vinculada a un delito de violación sexual es la “expresión de los hechos percibidos por los sentidos; es un recuento de las diversas modalidades que rodean el acto sexual”, siendo así la víctima está en un supuesto estado de violencia y agresión, debe procurar explicar suficientemente al juzgador o investigador, cuáles fueron las circunstancias, modo y lugar, aspectos que sin lugar a dudas por el estado emocional que se encuentra la víctima es muy difícil de realizar, asimismo no se puede afirmar a certeza que la víctima siempre miente, sino que por las circunstancias existe una alteración de la memoria.

Como lo indica el autor antes citado es “aterrador que la cara de la conciencia se haya convertido en culpa, nuestros recuerdos pueden cambiar y alterarse sin remedio y, que lo que nos parece saber y creemos de todo corazón, no es necesariamente cierto”, ello nos motiva a comprender los elementos psicológicos del testimonio, tales como: la percepción, la memoria, la credibilidad, siendo estos elementos necesarios para la valoración adecuada de un testimonio, lo cual evidencia que a nivel procesal el testimonio de la víctima por delito de violación sexual, también debe cumplir con los elementos para que pueda tener un valor de verdad como prueba.

2.2.10. Elementos del testimonio de la víctima

(Moreno, 2014) definió cada uno de los elementos del testimonio, y que desde nuestra óptica, siempre deberá cumplir todos los elementos.

- a) La percepción: “es la sensación interior que resulta de la impresión natural de nuestros sentidos, el testigo se haya común mente en una condición negativa, diferente al observador, ya que existen condiciones subjetivas como el estado emocional, interés, disposición mental y condiciones objetivas, percepción de un objeto , luz, distancia, etc.”. (p.77)
- b) La Memoria.- “No es algo tangible, sino es la actividad o proceso de diversas operaciones, tales como la preservación de impresiones, recuerdos y ubicación en el espacio tiempo, en todo este proceso existe un trabajo de seleccionamiento, coordinación y de interpretación, donde influye el sentido crítico y el poder de juicio, siendo la impulsividad y la falta de dominio las que reflejan un testimonio oscuro y ambiguas como excesivamente tajantes y rígidas” (p.78).
- c) Credibilidad.- En la actualidad existe una sobrecreencia y robustecimiento de información, por tanto la credibilidad se aprecia como algo escaso y muy codiciado a la vez, para los hombres del derecho y la sociedad en común el discurso político con rasgos jurídicos, es creíble en parte, ya que en la mayoría de casos no se evidencia una real acción, entonces

tomando como fuente que la credibilidad tiene en la actualidad un significado muy volátil, la credibilidad como prueba debe mostrarse como cualidad creíble, que debe ser creído por el Juez y el Fiscal, infiriéndose entonces que no será creíble se aprecie ilogicidad, y violencia a los enfoques científicos y a las máximas de las experiencias.

2.2.11 La prueba pericial y la psicología forense en los delitos de violación sexual

La prueba pericial, y específicamente la peritación psicología forense, en puridad solo es un medio de prueba más, que debe respetar aspectos procedimentales para su validez, ya que desde el concepto puramente procesales cualquier persona puede ser un perito, solo basta que tenga conocimientos especializados en determinado arte, ciencia, profesión y otros, esto con la finalidad de brindarnos, una descripción detallado de lo que pretendamos comprender, explicación de lo antes descritos, análisis de las causas problemáticas, y después de haber realizado todo el proceso científico de información emitir sus conclusiones a fin de que sean útiles para los fines del juzgador.

Nos preguntamos ¿Puede ser el peritaje determinante?, me atrevo afirmar, que en algunos casos, claro que, si, por su naturaleza compleja; pero conforme precise tal afirmación es relativa ya que, no en todos los casos se debe valorar a la prueba pericial como algo determinante. Tal accionar,

generaría una impresión de que el Juzgador es el perito y ya no el Juez.

Por ello es necesario que los delitos complejos especialmente el que es materia de investigación, deben ser realizadas por personas con conocimiento experto, debiendo ser objetivos lo que significa dominar un lenguaje concordado entre conceptos y realidad y sin dependencia al sujeto que lo conoce; asimismo brindar conceptos claros, pues el experto debe atribuirle significado adecuado y comprensible, a fin de no brindar una imagen débil de lo que pretende proyectar, y ser racionales en su determinación lo que involucra que debe primar la razón antes que sus propias emociones, debe ser falible este aspecto debe ser comprendido desde de la óptica que cualquier análisis científico es pasible de ser corregido, existiendo siempre un margen de error, por tanto el perito debe ser honesto en lo descrito y defino; sistemático los criterios y conceptos no deben ser aislados y sin orden, sino que deben guardar relación los unos con los otros; analítica por que usa la realidad para su comprensión descomponiéndolos para su mejor comprensión y explicación, por ultimo verificable las hipótesis planteadas deben estar sujetas a comprobación, no hay discusión que no existe verdad absoluta, pero se debe intentar llegar a la verdad.

Todo lo antes indicado debe ser útil de manera aplicativa en

las investigaciones por violación sexual, donde que los peritajes obedezcan a un criterio de verdad y no a emociones personal de estigma y etiquetamiento social, siendo que el pronunciamiento será utilizado por el investigador para generar certeza ante el juzgador, lo cual permitirá a este último usar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de las experiencias

(Vargas, 2018) explicó que existen dos tipos de peritos:

1. Perito de Oficio.- Ejercen función por designación oficial
2. Perito de Parte.- Designado por la parte interesada

En ambos casos, ya sea de oficio o de parte, deben cumplir las mismas características para ser considerado valido en el proceso penal.

Podemos decir entonces que en la vida humana no existe omniscientes, nadie es dueño de la verdad ni de todas las ciencias, el hombre y la sociedad son complejos, sin un cuestionamiento alguno la ciencia y la tecnología avanza a pasos desmesurados donde el juez no puede conocer todo, y se ve obligado hoy más que nunca a recurrir a la prueba pericial, para obtener una descripción, explicación, y análisis científico, bajo determinado método, que permitirá en la misma dimensión aclarar los hechos tanto a favor del imputado o en favor del titular de la acción penal.

2.2.12 El razonamiento judicial en los delitos de violación sexual

Ya indicamos que el legislador tiene un mensaje retributivo en su contenido normativo y su aplicación es de castigo, por tanto este trato extensivo permitiría entender que si el Estado ha normado tratos inhumanos, porque los que representan a este y administrar justicia quebrante el derecho principio presunción de inocencia, so pretexto que el Estado ya lo viene realizando.

El Doctor y profesor Zaffaroni, R. señaló que el discurso jurídico penal, “permite una exquisita esquizofrenización del saber jurídico”, que nace en un campo incierto, no nace de la realidad, existe tanta imaginación que el mensaje es incoherente, donde el verdadero jurista queda sometido a entender, comprender y aplicar los contenidos delirantes del legislador. Es aquí donde el razonamiento judicial del juez, se pone en práctica, donde que este deberá preservar la normas a fin de no mostrar que estamos en un estado ilegal e ilegítimo, a la agencia judicial es el último poder en contaminarse, pues son ellos quienes deben proteger los derechos humanos, pero al momento de resolver cada caso en concreto sin percatarse admiten las ideas irreales del legislador, convalida sus actos ilegítimos y deslegitimados.

El mismo, autor aproximándose a un concepto específico del

delito de violación sexual, nos advierte que las agencias de poder, vienen desplegando esfuerzos sobreabundantes para preservar el saber jurídico de la mano con una comunicación masiva como vinculado dependiente, esto con la finalidad de evitar que se observe la verdadera realidad, una que carece de valores, y cero conciencia ética. Y si bien el Estado ha intentado controlar la sexualidad, su eficacia solo se limita al campo normativo, carente de aplicación en la realidad, pudiéndose concluir que el control de la sexualidad por parte del poder estatal no existe un conocimiento especializado, habilitado de poder para brindar confianza y seguridad, ya que estos mismos que regulan aspectos sexuales, dependen de los medios de comunicación masivos quien brindar un doble mensaje, predominando la perversión. Por lo antes indicado podemos apreciar que la labor del Juez en un proceso judicial es una lucha de conocimientos jurídicos y ético, por un lado aplicar normas carentes de logicidad y realidad, o aplicar verdaderamente el derecho y ser considerado un anormal por no seguir las reglas, o dicho de otro modo por mostrar la realidad y se un crítico ético del sistema penal.

(Aguilo, J. & Grandez, P., 2017) precisó que el sustento o motivación adecuado se conoce como “razones” las cuales justifican el razonamiento judicial, pero existen otros factores

que buscan solo una explicación temporal en un decisión judicial, por eso es necesario diferenciar explicaciones y justificaciones de las vísceras (instintos y corazonadas).

Lo antes indicado es cierto en nuestra realidad, vemos sentencias por casos mediáticos, donde el razonamiento judicial queda reducido solo a una explicación para calmar necesidades sociales, repotenciadas por los medios de comunicación, donde el Juez actúa solo por instinto y corazonada, a fin de no ganarse responsabilidades innecesarias, por las que pueda después ser perseguido y sancionado por el propio Estado, a no cumplir necesidades sociales de etiquetamiento e estigmatización, sin lugar a duda esta situación se complica, si nos encontramos en el siguiente escenario, si en el juzgamiento a un sujeto por el delito de violación sexual el fiscal es mujer y el juez es mujer, basado en la realidad evidentemente se sentirá, un clima de repulsión y exclusión inmediata al sujeto, es allí donde entran a predominar los sentimientos y emociones, quedándose ya no en dominio del sistema jurídico penal, sino de valores éticos.

2.3. Definiciones Conceptuales

D.C.1. Presunción de Inocencia

(Derecho.com, 2014) explicó que “es en principio jurídico penal, que establece la inocencia de la persona como regla.

Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrá aplicarse una pena o una sanción”.

Higa, C. (S/N) señaló, ahora bien, ¿es correcto considerar a una persona inocente mientras no se pruebe el delito que se le imputa? Desde un punto de vista lógico, no. El hecho que no se haya probado que una persona cometió el delito que se le imputa no significa que efectivamente no lo haya cometido por las siguientes razones:

- (i) “El proceso tiene como objeto probar que el acusado es responsable de los delitos que se le acusa en función a la evidencia existente en el proceso. El proceso no tiene como objeto probar la inocencia del acusado sobre los delitos imputados. Además, esto último podría resultar, en muchos casos, o imposible o de muy difícil probanza, porque constituye la probanza de un hecho negativo: ¿Cómo pruebo que no he cometido el delito que me imputan?.”
- (ii) La probanza de la responsabilidad del acusado se tiene que realizar dentro de ciertos límites impuestos por el ordenamiento, motivo por el cual, si una prueba no ha sido producida, admitida o actuada de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, ésta no se tendrá por válida. Por ello, pueden existir medios probatorios que

demuestren la responsabilidad del acusado; sin embargo, al no ser válidas, no podrá ser utilizada para condenar al acusado.

- (iii) El estándar de prueba exigido es el que la acusación se demuestre más allá de toda duda razonable, lo cual significa que, en ciertos casos, si la hipótesis de la defensa es razonable, no se podrá condenar al acusado, pese a que la hipótesis de la acusación sea más creíble. (p. 4).

D.C.2. Valoración judicial

(SICCHA, 2015)“ manifestó que “es una operación intelectual realizada por el juez destinado a establecer la eficacia de las pruebas actuadas. Valorar la prueba consiste en analizar si los hechos y afirmaciones alegados por las partes ha sido contrastadas”.

D.C.3. Verosimilitud

(Quiñones, 2008) “(...) señaló que significa que para demostrar el delito la escena del crimen debe evidencia vínculos mínimos con la declaración directa de la víctima, en tal sentido, cuando se trate especialmente de delitos de violación sexual, estos vinculados de objetividad y subjetividad, deben ser tratados con mucho cuidado respecto

a la existencia de huellas y vestigios relacionados a la escena del crimen; asimismo puede suceder, que no se pueda corroborar un dato, lo cual, no necesariamente dejara invalido la testimonial del agraviado.

D.C.4 Imparcialidad

(Gardey, s.f.) manifestó que “ la ausencia de inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar o juzgar un asunto. La noción de imparcialidad puede entenderse como un criterio de justicia que se basa en decisiones tomadas con objetividad, esto quiere decir que la persona a cargo de juzgar (...)”.

D.C.5 Debido Proceso.

(ENCALADA, 2016) señaló que el debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual todo ciudadano es sometido a un proceso, así también tiene derecho a ciertas garantías mínimas, dirigidas a proteger una decisión justa y equitativa dentro del proceso penal, también tendrá la oportunidad de ser oído, informado y hacer valer sus pretensiones legítimas ante el juez, respetando su un buen trato y su dignidad.

Siendo así una de las extensiones del debido proceso es la motivación como garantía a favor del agraviado

especialmente en referencia en los delitos de violación sexual la debida motivación de la resolución judicial como derecho fundamental que se es se encuentra reconocida para cualquier persona. Por lo tanto, es un derecho también invocable por la víctima de un delito. Recalcamos la importancia de este aspecto por cuanto muchas veces se piensa que solamente la persona que viene siendo procesa es quien puede demandar el reconocimiento de este derecho. Teniendo presente este aspecto, se avanza un primer paso en la efectiva tutela jurisdiccional del demás derecho que le asisten a ella, tales como su derecho a la verdad, a la defensa, a la reparación integral, entre otros. Villegas, E. (2017, pp. 272-273).

2.4. Sistema de hipótesis

2.4.1. Hipótesis general

Existe relación significativa entre el proceso por el delito de violación sexual y la transgresión del principio de presunción de inocencia en el distrito judicial de la provincia de Coronel Portillo durante el año 2016.

2.4.2. Hipótesis específicas

- A. Existen diversas causas para que el proceso por el delito de violación sexual genere la transgresión del principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.

- B. El proceso por el delito de violación sexual transgrede en gran medida al principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.

2.5. SISTEMA DE VARIABLES

2.5.1. Variable Independiente:

Proceso de violación sexual

2.5.2. Variable Dependiente (y)

Transgresión al principio de presunción de inocencia

2.6. Operacionalización de variables

V.I Proceso de violación sexual	DIMENSIONES	INDICADORES
	Violación sexual de 10 a 15 años	Difamación
		Conflicto
	Violación sexual de 15 a 17 años	Trata de personas
		Enfermedad psiquitrica
	Origen de una denuncia por violación sexual	Difamación
		Conflicto familiar
		Baja Cultura moral
		Extorción
	Causas de las sentencias absolutorias	Retracto de la victima
		No, declaración de la víctima en juicio oral

V.D transgresión al principio de presunción de inocencia		Negarse a pasar el reconocimiento médico legista
		Falta de elementos periféricos
	Obtención de la prueba plena	Complejidad de los actos de investigación
		Pericias necesarias
		Demora de las pericas
		Falta de colaboración del imputado
	Motivación de la sentencia	Fundados y graves elementos de convicción
		Estigma o etiquetamiento
		Condición económica
		Gravedad de la pena
		Edad del agente
	Presunción de culpabilidad	Consentimiento
		Conflictos en la relación
		Condición económica
		Edad del agente

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de Investigación:

3.1.1 Enfoque

El tipo de investigación que se realizó es el Explicativo-Correlacional, para describir y explicar las causas que generan la transgresión del principio de presunción de inocencia, en el proceso penal por el delito de violación sexual, emitidos por los jueces del colegiado de la provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016, para lo cual se aplicaron encuestas en la muestra seleccionada, y se estableció una relación de causa efecto entre la variable independiente y la variable dependiente. Asimismo me enfoque en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (Sampieri, 2010).

3.1.2 Alcance o Nivel

Explicativo- Correlacional, así mismo el estudio realizado según Hernández y Otros (2010) es de enfoque cuantitativo, que los autores definen como aquel que “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (2010).

3.1.3 Diseño de Investigación:

El diseño de la presente investigación, es no experimental en su variante, transversal y longitudinal será transversal porque la investigación es de tipo descriptivo y explicativo.

3.2 Población y Muestra

a. Población

En la presente investigación se aplicaron encuestas a vocales superiores, jueces del juzgado colegiado, fiscales superiores, fiscales provinciales, adjuntos provinciales, teniendo como población el Juzgado Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y los despachos del Ministerio Público en el año 2016.

b. Muestras

La muestra ha sido hecha al azar, para ello hemos considerado la obtención de datos, directos e indirectos.

La muestra es del tipo estratificada. Hemos considerado la obtención de datos directos de los conocedores del tema vinculados funcionalmente a la carga procesal, materia de investigación.

Siendo que la encuesta estará conformada:

N°	MUESTRA	ENCUESTAS
1	Vocales Superiores	4
2	Jueces del Juzgado Colegiado	3
3	Fiscales Superiores	10
4	Fiscales Provinciales	10
5	Adjuntos Provinciales	3
	TOTAL	30

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnicas	Instrumentos
Encuesta	Ficha de encuesta tipo cuestionario
Análisis documental	Matriz de análisis
Fichaje	Bibliográficas y textual

3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de información

3.4.1 Técnicas para el procesamiento de datos:

Se procesa la información mediante la observación y el análisis de la muestra aplicada, donde se evidencio que existe una diversidad de causas que afectaron el principio de presunción de inocencia, tales como la prisión preventiva, la falta

de elementos periféricos, la edad de la víctima, control social y otros.

3.4.2.1 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información.

a. Análisis descriptivo:

En cuanto al análisis descriptivo de cada una de las variables se tendrá en cuenta las medidas de tendencia central, de dispersión para las variables y de porcentaje para las variables categóricas.

b. Análisis inferencial:

En el análisis inferencial de los datos se utilizará el coeficiente de correlación del modelo Ji cuadrada con el fin de medir la relación entre las variables en estudio. Se tuvo en cuenta una significación de 0,05.

Para el procesamiento de los datos se utilizará el paquete estadístico Excel para la prueba de correlaciones.

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1 Relatos y descripción de la realidad observada

De la realidad observa se podrán evidenciar 10 figuras, los cuales permitirán comprender conjuntamente con la observación y el análisis de los expedientes, las diversas causas que promueven la relación lesiva que tiene el proceso por el delito de violación sexual con la afectación al principio de presunción de inocencia, la realidad pone en evidencia que los responsables de investigar e administrar justicia, pierden objetividad ante la propia realidad incoherente y sin verdad del sistema penal.

4.2. Entrevistas y estadígrafos

4.2.1. Entrevistas y Cuadros Estadísticos

La entrevista se realizó a los 30 integrantes de la muestra, aplicando el cuestionario que se muestra en el ANEXO N° 04.

Tabla N° 01
Causa común de la violación sexual en los menores de 10 años

	fi	Fi	hi%	Hi%
Trata de personas	1	1	3.33%	3.33%
Baja cultura moral	26	27	86.67%	90%
Enfermedad psiquiátrica	3	30	10%	100%
Conflicto	0	30	0%	100%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4
Elaboración: Propia

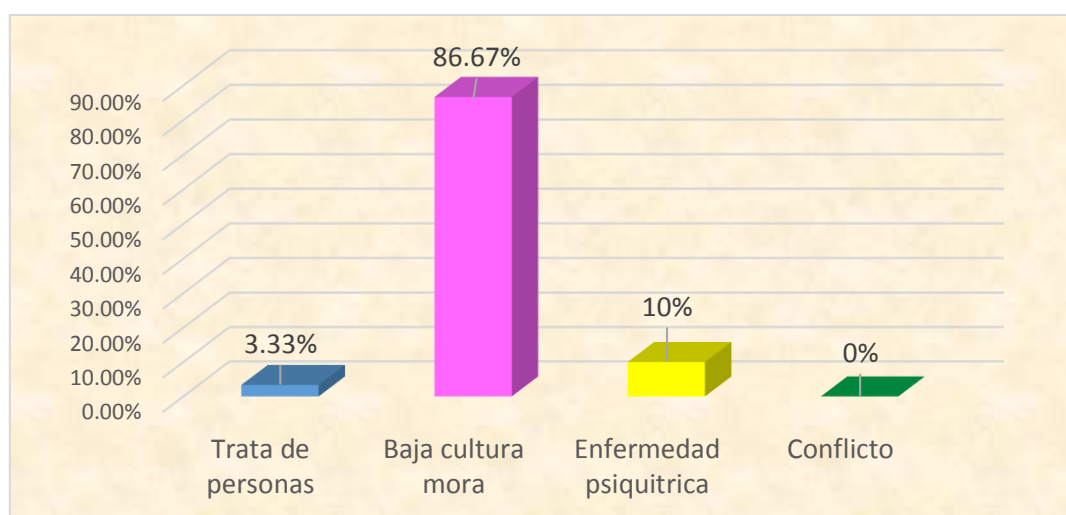


Figura N° 01

Causa común de la violación sexual en los menores de 10 años

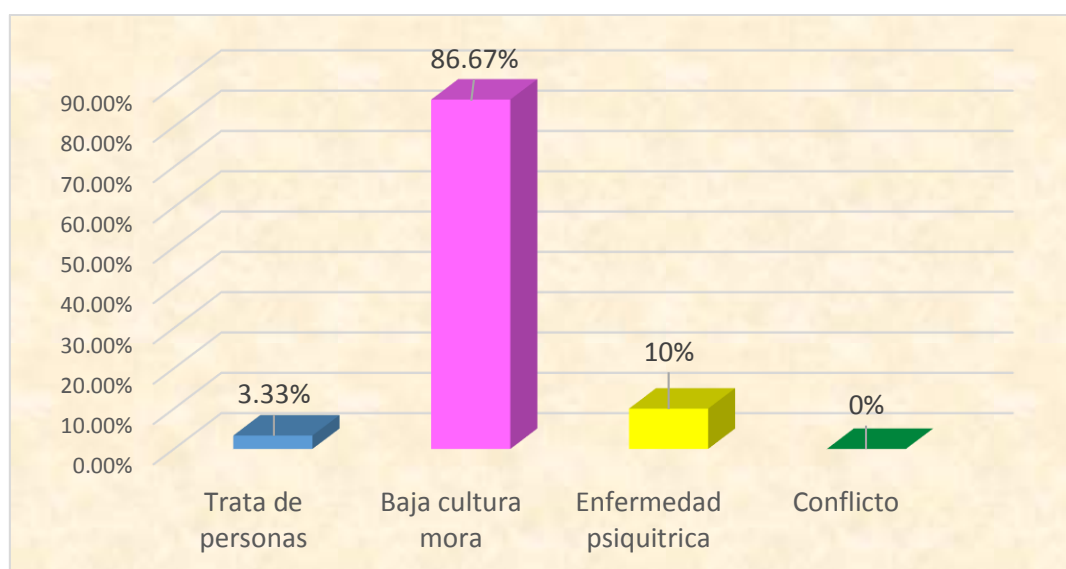
Interpretación

En base a la tabla y figura N° 01, el 3.33% de los entrevistados sostienen que la violación a menores de 10 es la trata de personas; mientras que el 86.67% de los entrevistados sostienen que la violación es producto de la baja cultura moral y el 10 % sostienen que se debe a la enfermedad psiquiátrica,

Tabla N° 02
Causa común de la violación sexual en los menores de 10 a 13 años

	fi	Fi	hi%	Hi%
Trata de personas	1	1	3.33%	3.33%
Baja cultura moral	26	27	86.67%	90%
Enfermedad psiquiátrica	3	30	10%	100%
Conflicto	0	30	0%	100%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4
Elaboración: Propia



Fuente: Tabla 2
Elaboración: Propia

Figura N° 02,
Causa común de la violación sexual en los menores de 10 a 13 años

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 02, el 3.33% de los entrevistados sostienen que la violación a menores de 10 a 13 años, es la trata de personas; mientras que el 86.67% de los entrevistados sostienen que la violación es producto de la baja cultura moral y el 10 % sostienen que se debe a la enfermedad psiquiátrica,

Tabla N° 03
La causa común de la violación sexual a los mayores de 14 a 17 años

	fi	Fi	hi%	Hi%
Trata de personas	0	0	0%	0.00%
Baja cultural moral	26	26	86.67%	87%
Enfermedad psiquiá- trica	1	27	3%	90%
Conflicto	3	30	10%	100%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4

Elaboración: Propia

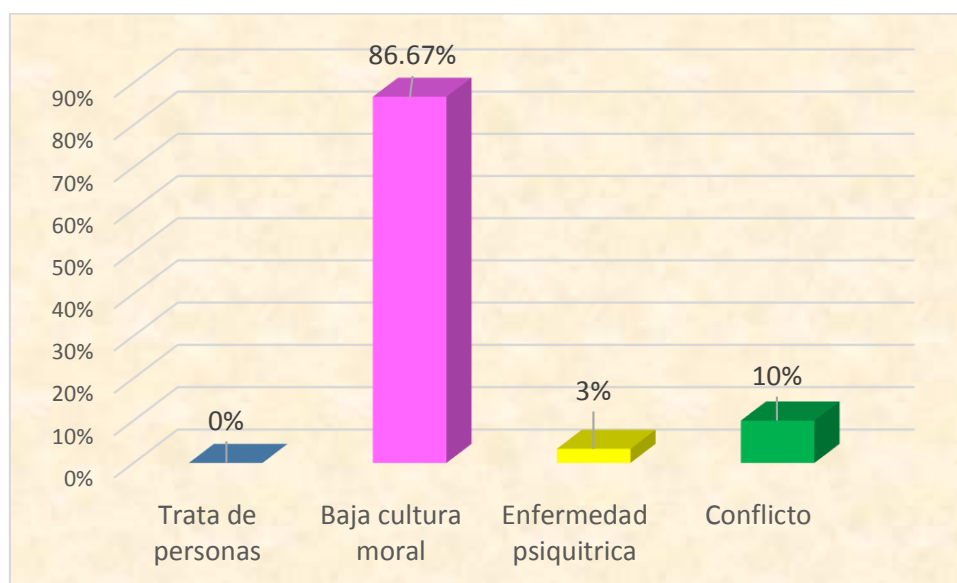


Figura N° 03
Causa común de la violación sexual en los mayores de 14 a 17 años

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 03, el 86.67% de los entrevistados sostienen que la violación a mayores de 14 a 17 años, es la baja cultura moral; mientras que el 3 % de los entrevistados sostienen que la violación es producto de las enfermedades psiquiátricas y el 10 % sostienen que se debe a los conflictos

Tabla N° 04
Las causas más comunes que dan origen a una denuncia por violación sexual

	fi	Fi	hi%	Hi%
Difamación	5	5	16.67%	16.67%
Conflicto familiar	6	11	20%	37%
Baja cultura moral	4	15	13.33%	50%
Extorsión	15	30	50%	100%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4

Elaboración: Propia

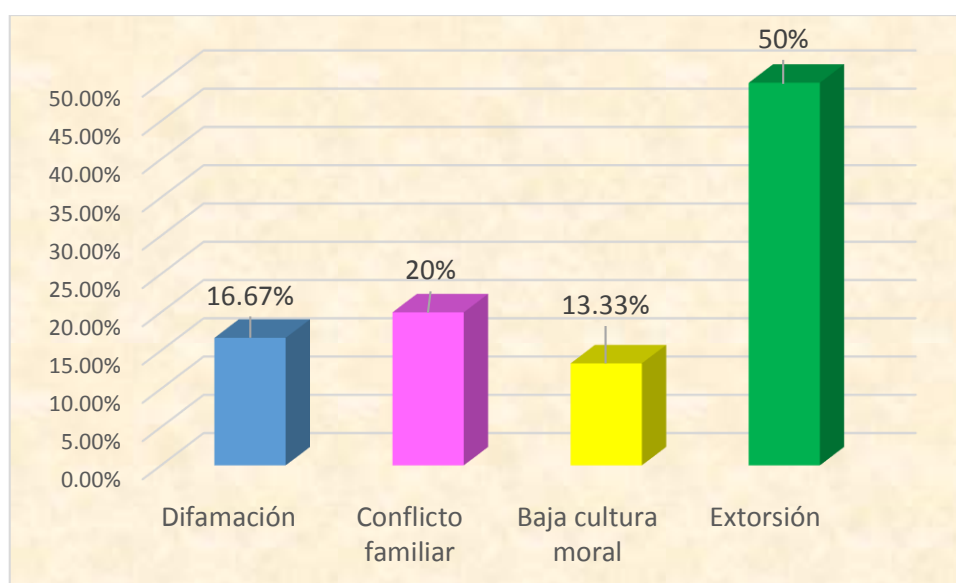


Figura N° 04
Las causas más comunes que dan origen a una denuncia por violación sexual

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 04, el 16.67 % de los entrevistados sostienen que Las causas más comunes que dan origen a una denuncia por violación sexual, es la difamación; mientras que el 20 % de los entrevistados sostienen que es el conflicto familiar y el 13,33 % sostienen que se debe a la baja cultura moral y por último el 50% lo atribuye a la extorsión.

Tabla N° 05,
Las causas más comunes en las sentencias absolutorias por violación sexual en mayores de 14 años

	fi	Fi	hi%	Hi%
Retracto de la victima	4	4	13.33%	13.33%
No declaración de la víctima en juicio oral	7	11	23.33%	36.67%
Negarse a pasar el reconocimiento médico legal	9	20	30.00%	66.67%
La falta de elementos periféricos	10	30	33.33%	100%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4
Elaboración: Propia

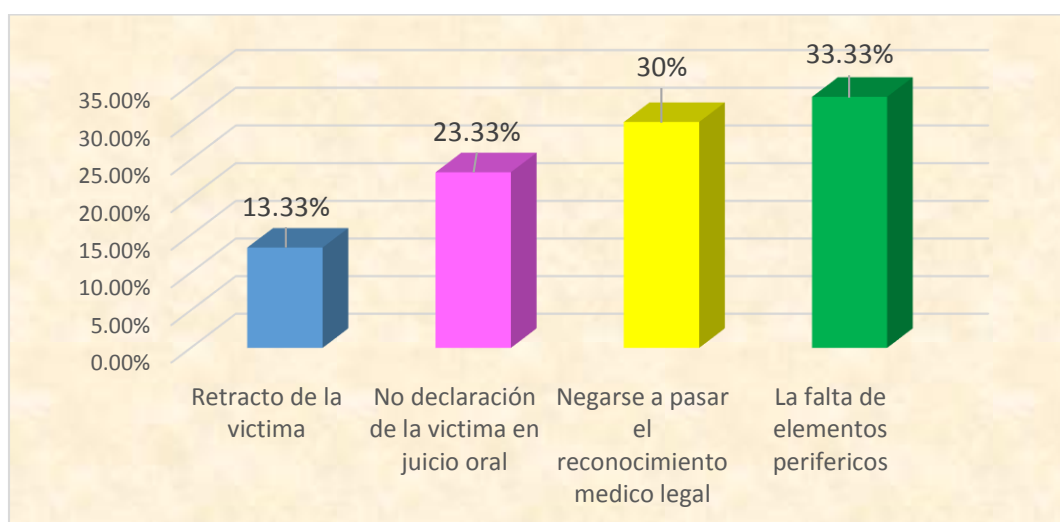


Figura N° 05
Las causas más comunes en las sentencias absolutorias por violación sexual en mayores de 14 años

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 05, el 13.33 % de los entrevistados sostienen que las causas más comunes en las sentencias absolutorias por violación sexual en mayores de 14 años, es el retracto de la víctima; mientras que el 23.33 % de los entrevistados sostienen que es por la no declaración de la víctima en el juicio oral y el 30 % sostienen que se debe a negarse a pasar el reconocimiento médico legal y por último el 33.33% lo atribuye a la falta de elementos periféricos.

Tabla N° 06
Las causas más comunes para prolongar una prisión preventiva hasta por 18 meses en las denuncias por violación sexual

	fi	Fi	hi%	Hi%
Complejidad de actos de investigación	18	18	60%	60.00%
Pericias necesarias	6	24	20%	80.00%
Demora de las pericias	6	30	20%	100.00%
Falta de colaboración del imputado	0	30	0%	100%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4

Elaboración: Propia

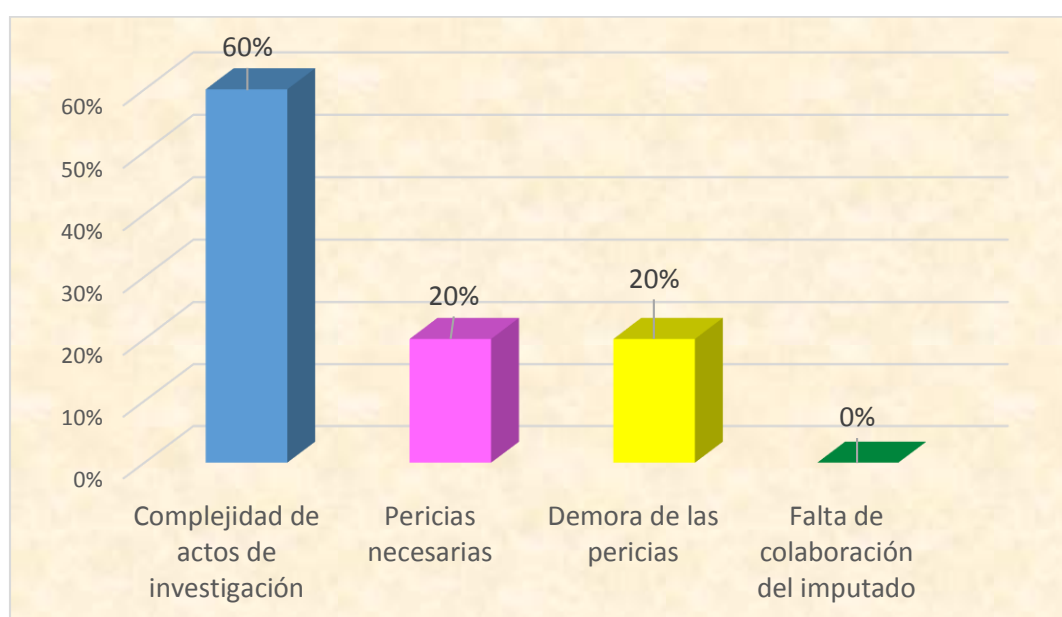


Figura N° 06
Las causas más comunes para prolongar una prisión preventiva hasta por 18 meses en las denuncias por violación sexual

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 06, el 60 % de los entrevistados sostienen que las causas más comunes para prolongar una prisión preventiva hasta por 18 meses, es la complejidad de los actos de investigación; mientras que el 20 % de los entrevistados sostienen que es pericias necesarias y el 20% sostienen que se debe a demoras a las pericias.

Tabla N° 07
Las causas para declarar fundado una prisión preventiva hasta por 9 meses en las denuncias por violación sexual

	fi	Fi	hi%	Hi%
Fundados y graves elementos de convicción	22	22	73.33%	73.33%
estigma o etiquetamiento	6	28	20%	93.33%
Condición económica	0	28	0%	93.33%
Edad del agente	1	29	3.33%	96.67%
Gravedad de la pena	1	30	3.33%	100.00%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4
Elaboración: Propia

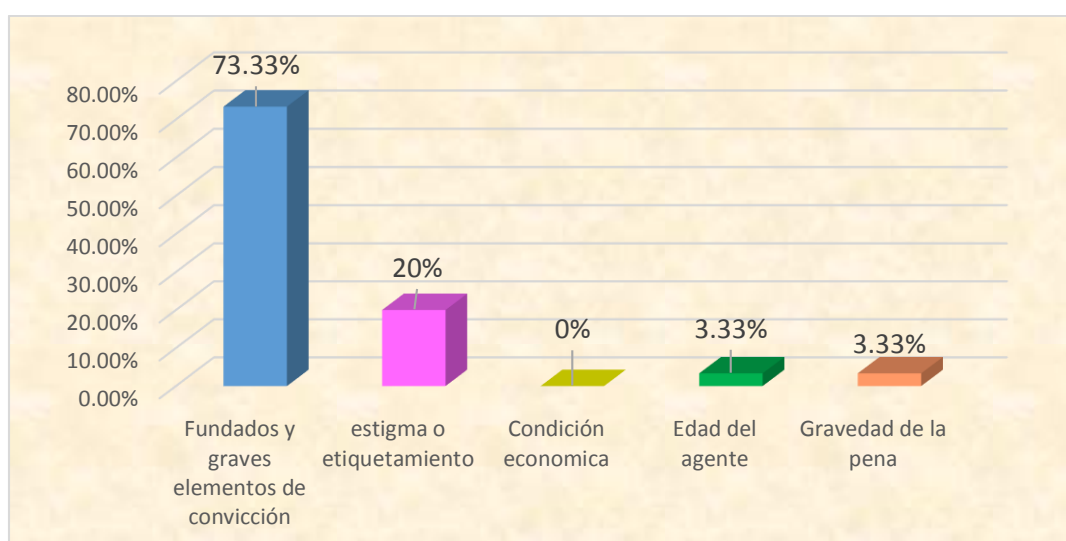


Figura N° 07
Las causas para declarar fundado una prisión preventiva hasta por 9 meses en las denuncias por violación sexual

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 07, el 73.33% % de los entrevistados sostienen que las causas para declarar fundado una prisión preventiva hasta por 9 meses en las denuncias por violación sexual, son los fundados y graves elementos de convicción; mientras que el 20 % de los entrevistados sostienen que estigmas o etiquetamiento y el 3.33 % sostienen que es la edad de agente y por último el 3.33% afirma que es la gravedad de la pena.

Tabla N° 08
Las causa más comunes para dicta una sentencia absolutoria con prisión preventiva de las denuncias por violación sexual

	fi	Fi	hi%	Hi%
Consentimiento	18	18	60%	60.00%
Conflictos en la relación	11	29	36.67%	96.67%
Condición económica	0	29	0%	96.67%
Edad del agente	1	30	3.33%	100.00%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4

Elaboración: Propia

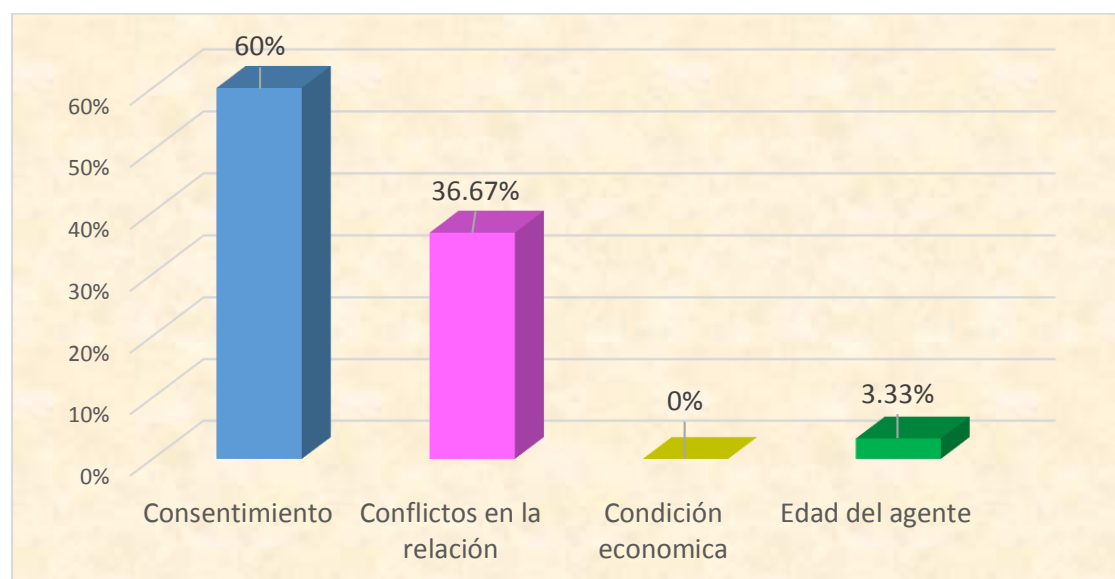


Figura N° 08
Las causa más comunes para dicta una sentencia absolutoria con prisión preventiva de las denuncias por violación sexual

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 08, el 60 % de los entrevistados sostienen que Las causa más comunes para dicta una sentencia absolutoria con prisión preventiva de las denuncias por violación sexual, son por consentimiento mientras que el 36.67 % de los entrevistados sostienen que son por conflictos en la relación y el 3.33 % sostienen que es la edad de agente.

Tabla N° 09
El acto sexual consentido es causal para una sentencia absolutoria

	fi	Fi	hi%	Hi%
Siempre	1	1	3%	3.33%
Casi siempre	10	11	33.33%	36.67%
Algunas veces	14	25	46.67%	83.33%
Pocas veces	5	30	16.67%	100%
Nunca	0	30	0%	100%
Total	30		100%	

Fuente: Base de datos Anexo 4
Elaboración: Propia

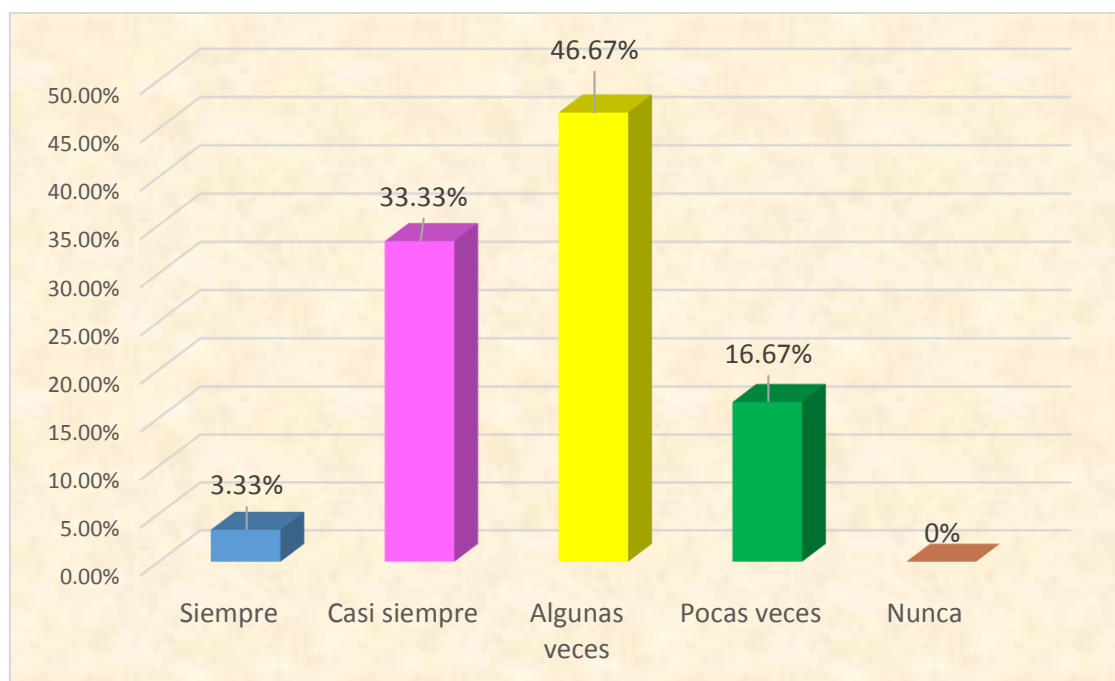


Figura N° 09
El acto sexual consentido es causal para una sentencia absolutoria

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 09, el 3.33 % de los entrevistados sostienen que el acto sexual consentido es causal para una sentencia absolutoria, es siempre, mientras que el 33.33 % de los entrevistados sostienen que es casi siempre y el 46.67 % sostienen que es algunas veces y por último el 16,67% opina que es pocas veces.

Tabla N° 10
La causa más común para una sentencia absolutoria por acto sexual por denuncia injustificada

	fi	Fi	hi%	Hi%
Celos	6	6	20%	20%
Infidelidad	8	14	26.67%	46.67%
Honor	0	14	0%	46.67%
Difamación	0	14	0%	46.67%
Conflictos personales	16	30	53.33%	100%
Total	30		47%	

Fuente: Base de datos Anexo 4

Elaboración: Propia

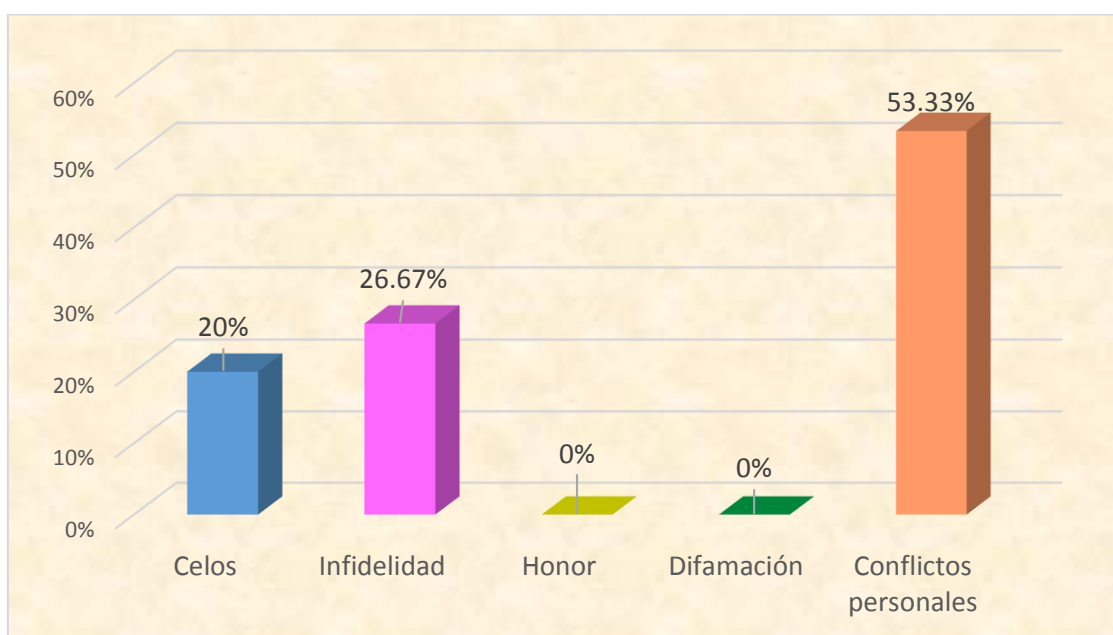


Figura N° 10
La causa más común para una sentencia absolutoria por acto sexual por denuncia injustificada

Interpretación

En base a la tabla y figura N° 10, el 20 % de los entrevistados sostienen que La causa más común para una sentencia absolutoria por acto sexual por denuncia injustificada, son los celos, mientras que el 26.67 % de los entrevistados sostienen que es la infidelidad y el 53.33 % sostienen que son los conflictos personales.

CAPITULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Contrastación de los resultados

Habiéndose determinado diversas causas que promueven la afectación al principio derecho presunción de inocencia, observaremos diversas frecuencias y advertiremos que en la mayoría de los procesos por violación sexual, el fiscal se siente obligado a solicitar prisión preventiva, si tener mayores elementos de convicción, dejándose sugestionar, por el solo hecho que es un delito muy grave, accionar que transgrede directamente el principio de presunción de inocencia, pese a que en el transcurso de la investigación existen otros medios de asegurar la presente el imputado, generándose en el estado de conciencia que el tipo penal continua siendo grave, las pruebas que se van obteniendo en el transcurso del proceso deberían transformar la objetividad del fiscal pero esto lejos de materializarse se vuelve más difuso prueba de ello es la Casación N° 842-2016, donde declararon nulo la incoación del proceso inmediato, sobre una persona que se encontró internada en un centro penitenciario por 14 meses, donde que por la sola sindicación de la madre, a razón de una historia difusa de su menor hija, dos días después de haber supuestamente cometido el hecho, la madre sindicó a una persona y la policía sin mayor justificación lo detuvo, producto del impacto mediático que genera el delito.

Por lo antes indicado la solución concreta a fin de que no existe una transgresión continua al principio derecho presunción de inocencia, basado únicamente por etiquetamiento y estigma social, donde el Estado promueve su propia ilegalidad y deslegitimación, es que el propio Estado no promueva un Estado ilegal por medio de sus agencias de poder, sino que al momento de crear y regular normas estas tenga una coherencia interna y un mínimo grado de verdad pero sobre todo que toda norma y la interpretación de esta tiene que ser desde un enfoque constitucional.

En ese sentido resulta necesario verificar la existencia del problema y proponer soluciones al respecto, siendo los pasos a seguir para la prueba de hipótesis esta en base, a Córdova, M. (1999) (42), quien establece que:

- Redactar las hipótesis
- Determinar el nivel α .
- Elección de la prueba estadística
- Lectura del P – valor
- Aplicación de la prueba estadística.

a) Prueba de hipótesis general

I. Redacción de hipótesis

Ho: No, existe relación directa entre el proceso por el delito de violación sexual y la transgresión del principio de presunción de inocencia en el distrito judicial de la provincia de Coronel Portillo

durante el año 2016.

H1: Existe relación directa entre el proceso por el delito de violación sexual y la transgresión del principio de presunción de inocencia en el distrito judicial de la provincia de Coronel Portillo durante el año 2016.

II. Determinar el nivel de Alfa

El nivel de significancia: $\alpha = 5\% = 0,05$, pero como es de doble cola es 0,025.

III. Elección de la prueba estadística

Es un estudio trasversal, en la que se aplicó la prueba de Chi Cuadrado.

IV. Lectura de P – Valor

Normalidad se debe de corroborar que la variable aleatoria en ambos grupos se distribuye normalmente. Para ello se utilizara la prueba de Shapiro Will por que el tamaño de la muestra es menor o igual a 30 individuos. El criterio para determinar si la (VA) se distribuye normalmente es:

Tabla 11
Prueba de normalidad

	Pruebas de normalidad					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
proceso por el delito de violación sexual	,295	30	,000	,835	30	,000
transgresión del "principio de presunción de inocencia"	,218	30	,001	,830	30	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Fuente: Base de datos Anexo

Elaboración: SPSS

- a) **P-valor** $> \alpha$. **Aceptar la H_0** = Los datos provienen de una distribución normal.
- b) **P-valor** $\leq \alpha$. **Aceptar la H_1** = Los datos no provienen de una distribución normal.

Tabla 12,
toma de decisión

P-valor de la variable Proceso de violación sexual = 0.00	<	0.025
P-valor de la variable transgresión al principio de presunción de inocencia = 0.00	<	0.025

Conclusión: Las variables: proceso de violación sexual y transgresión al principio de presunción de inocencia, no se comporta normalmente por lo que se aplica la prueba de Chi Cuadrado.

Fuente: Base de datos

V. Aplicación de la prueba de Chi Cuadrado

Tabla 13,
Prueba de Chi Cuadrado

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	21,171 ^a	9	,012
Razón de verosimilitud	24,390	9	,004
Asociación lineal por lineal	12,501	1	,000
N de casos válidos	30		
a. 15 casillas (93,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,53.			

Fuente: Base de datos

Toma de decisión:

Basándonos en la tabla N° 13. Afirmamos que el p valor (Sig.) 0.012, es menor que el nivel de significancia de 0,025. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis Nula y de aceptar la hipótesis de investigación, el cual manifiesta que:

Existe relación significativa entre el proceso por el delito de violación sexual y la transgresión del principio de presunción de inocencia en el distrito judicial de la provincia de Coronel Portillo durante el año 2016.

5.1.1. Sustentación consistente y coherente de su propuesta

Por los resultados obtenidos, podemos decir que si existe una grave afectación al principio derecho presunción de inocencia los cuales se sustentan en diversas causas con conforme a los cua-

dros estadísticos señalados en el punto 5.1, y vemos que las causas más preocupantes para la afectación del principio de presunción de inocencia, es que se ve al varón es tratado como un ser un monstruo, que desde el momento que pesa sobre el alguna denuncia, su derecho desde los ojos de las agencias de poder, ya no es de presunto responsable si no de un violador consumado, existiendo muchas causas subjetivas, como difamación, problemas conyugales, economía, etiquetamiento, estigmatización, pero sobre todo un bajo nivel de educación, donde el varón si bien no cometió el delito en la mayoría de casos observados y analizados, igualmente se observa que no tiene una imagen o concepción clara de igual y respeto por el otro género, que el sistema penal al generarles un imagen de ser horrible, simplemente llegan al extremo de haber deseado consumir el acto, a fin de que existe una sanción verdadera por un acto real y no por cuestiones puramente subjetivas.

Se evidencia también que la afectación al debido proceso, no solo es por la transgresión a principios procesales fundamentales, sino que afecta la calidad de vida, moral del presunto acusado, y que en muchos casos el acto sexual fue consentido, esto porque en el ordenamiento peruano, una menor de 14 años ya puede casarse en ese sentido la actividad sexual de la menor es visto de una manera muy distorsionada en la realidad jurídica y sirve como criterio de

imputación y persecución penal, donde son los representantes legales de los adolescentes quienes promueven denuncias para el criterio de que adolescente hija fue obligada a mantener un acto sexual.

En tal sentido el Estado requiere de una reforma normativa en el sistema penal con la ayuda de una política criminológica, ya que este último le permitirá ver al primero las deficiencias de su sistema, cuyo enfoque es de poner al varón como un ser despreciable, por falta de coherencia y verdad en las normas procesales y sustantivas.

5.1.2. Propuesta de nuevas hipótesis

Una de las primeras propuestas de nuevas hipótesis sería:

1. El Estado es altamente responsable de la afectación al principio derecho de presunción de inocencia.
2. Las normas del sistema procesales son ilegítimas e ilegales con el trato al investigado.
3. Existe un alto grado de etiquetamiento e estigmatización por las agencias de poder en perjuicio del investigado.
4. Los responsables de las agencias de poder solo cumple con el discurso jurídico penal, a fin de no contradecir los fines económicos y políticos, afectando directamente los derechos fundamentales del hombre.

5. Las agencias de poder cumplen un rol puramente político, alejados completamente de la protección real de los derechos del hombre.

CONCLUSIONES

1. Existe relación significativa entre el proceso por el delito de violación sexual y la transgresión del “principio de presunción de inocencia” en el distrito judicial de la provincia de Coronel Portillo durante el año 2016.
2. Existen diversas causas para que el proceso por el delito de violación sexual genere la transgresión del principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016, las cuales son, la falta de fundados y graves elementos de convicción, estigma o etiquetamiento, edad del agente, gravedad de la pena, procesos donde fueron ordenados fundados la prisión preventiva, procesos donde se declaró fundado su prolongación por considerarse complejo, denuncias injustificadas.
3. El proceso por el delito de violación sexual transgrede en gran medida al principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario que los jueces analicen como mayor acuosidad los pedidos de prisión preventiva, ya que resulta injusto que al final del proceso se penal este sea absuelto, después de haber estado en prisión por 9 o 18 años de manera injustificada, lo que sin duda genera grave afectación al debido proceso. Dicho análisis debe ser extensivo también al pedido racional y proporcional de los señores Fiscales.
2. La educación es un punto necesario, para afrontar y reducir el índice de denuncias de violación sexual, ya que si enseñados desde muy jóvenes que nadie es propiedad de nadie y que el varón y mujer son sujetos de derecho en igualdad de condiciones en el ejercicio y goce de sus derechos, el varón no será tratado con estigma o etiquetamiento.
3. Cuando el Estado pretenda crear normas jurídicas, no tiene que ser selectivo, ya que promueve un enfoque seleccionador de los sectores más excluidos, del sistema procesal penal requiere de un guía para la aplicación justa al hombre, siendo esta la criminología.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros

Aguilo, J. & Grandez, P. (2017). *SOBRE EL RAZONAMIENTO JUDICIAL*. Lima: PALESTRA.

Altamirano, F. (2010). *TEORÍA DEL DELITO MANUAL PRÁCTICO PARA SU APLICACIÓN EN LA TEORIA DEL CASO*. Lima: Editorial Nomos & Thesis E.I.R.L.

Angulo, P. (2014). *EL CASO PENAL*. Lima: GACETA JURÍDICA S.A.

Arbulú, V. (2004). *DERECHO PROCESAL PENAL*. Lima: Ediciones Legales

Castillo, J. (2018). *LA PRESUNCION DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO*. Lima, Lima, Peru: Ideas.

Claux, R. (1979). *TEORIA DEL TIPO PENAL TIPOS ABIERTOS Y ELEMENTOS DEL DEBER JURIDICO*. Argentina: EDICIONES DELPA BUENOS AIRES.

Encalada J. (2016). *CALIDAD DE SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA SOBRE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, EN EL EXPEDIENTE N° 0626-2011-0-2001-JR-CI-01, DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA – PIURA*. 2016. *TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO*. PIURA, PIURA, PERÚ.

Hernández, R. & et al. (2012). *LA PRUEBA EN EL CODIGO PROCESAL PENAL 2004*. Lima: GACETA JURÍDICA S.A.

Hernández, R. (2010) *Metodología de la investigación*. México, D.F.: McGraw-Hill. Interamericana Editores.

Lopez, V. (2011). *DERECHO Y ARGUMENTACIÓN*. Colombia: EDICIONES JURIDICAS GUSTAVO IBAÑEZ

Maletta, H. (2015) *HACER CIENCIA teoría y práctica de la producción científica*. Lima. Universidad del Pacifico. 24 pp.

Menéndez, A. (2015). *ESTUDIOS JURIDICOS Y UNVERSITARIOS*. España: Editorial Civistas

Moreno, L. (2014). *El Falso Testimonio*. Bogota, D. C.: EDICIONES NUEVA JURIDICA.

Peña, C. (2011). *Derecho procesal penal. Sistema acusatorio, teoría del caso y técnicas de litigación oral*. Tomo I. Lima: Editorial Rodhas.

Pérez, M. & et al. (S/N). *La Prueba EN EL PROCESO PENAL*. Lima: GACETA JURÍDICA S.A.

Quiñones, D. (2008). *LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LOS DELITOS SEXUALES: ¿INFLEXIÓN EN LA EXIGENCIA DE UNA SUFICIENTE ACTIVIDAD PROBATORIA? ANÁLISIS DEL ACUERDO PLENARIO Nro. 2-2005/CJ-116*. *El Anuario de Derecho Penal*, 11.

Salinas, R. (2015). *DERECHO PENAL*. Lima: EDITORIAL IUSTITIA

Vargas, M. (2018). *La Prueba Pericial Forense*. Lima: LEX & IURIS

Revistas jurídicas

Higa, C. (S/N). El derecho a la Presunción de Inocencia desde un punto de vista constitucional, 133. *Derecho & Sociedad Asociación Civil*, 4.

Tesis relacionadas

APRECIACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PSICOSOCIALES DE LOS VIOLADORES DE MENORES, Elvis Jorge Alcalde Muñoz, 2007, Universidad Nacional Mayor de San Marcos

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y PSICOSOCIALES EN HUÁNUCO, Huaranga Chuco Odeny Moner, 2016, Universidad de Huánuco

Sexismo benévolo y violencia sexual percepción social de las relaciones íntimas, M. Mercedes Durán Segura, 2010, Universidad de Granada, para optar el grado de Doctor

Páginas web

Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116, (30 de SETIEMBRE de 2005).
<http://www.derecho.usmp.edu.pe>. Obtenido de
http://www.derecho.usmp.edu.pe/cedp/jurisprudencia/Acuerdo%20Plenario%20N2_2005.pdf.

Bermudez, A. R. (29 de MAYO de 2013). <http://blog.pucp.edu.pe>.
Obtenido de
<http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/05/29/debido-proceso/>.

Gardey, J. P. (s.f.). <https://definicion.de/imparcialidad/>. Obtenido de
<https://definicion.de/imparcialidad/>.

Legis.pe. (5 de JUNIO de 2017). <http://legis.pe/r-n-2172-2015-lima-criterio-verosimilitud-declaracion-agraviado/>.

Legis.pe. (5 de JUNIO de 2017). <http://legis.pe/r-n-2172-2015-lima-criterio-verosimilitud-declaracion-agraviado/>.

PENAL, C. P. (29 de julio de 2004).
https://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.

Slccha, R. S. (12 de JUNIO de 2015). <http://studylib.es>. Obtenido de
<http://studylib.es/doc/4998776/valoracion-de-la-prueba>
Panta, D. & Somocurcio, V.
Quiñones https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_58.pdf

ANEXOS

ENCUESTA

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN

LA RELACION LESIVA ENTRE EL PROCESO DE VIOLACION SEXUAL Y LA TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DURANTE EL AÑO 2016.

RESPONSABLE ANGELICA MARIA VILLAVICENCIA ROJAS

INSTRUCCIONES: Marcar con una X, a fin que la información sea comprensible. El presente estudio se realiza con fines estrictamente académicos y tiene carácter de confidencialidad.

Gracias por su colaboración

I. DATOS GENERALES

- Sexo: M F
- Ocupación: Vocales Superiores Jueces del Juzgado Colegiado Fiscales Superiores Legista Fiscales Provinciales Adjuntos Provinciales

II. Estudio de la Variable Independiente: Inadecuado proceso judicial:

1. ¿Cuál considera Ud. que es la causa común de la violación sexual en los menores de 10 años?
 - a) Trata de personas
 - b) Baja cultura moral
 - c) Enfermedad psiquiátrica
 - d) Conflicto
2. ¿Cuál considera Ud. que es la causa común de la violación sexual en los menores de 10 a 13 años?
 - a) Trata de personas
 - b) Baja cultura moral
 - c) Enfermedad psiquiátrica
 - d) Conflicto
3. ¿Cuál considera Ud. que es la causa común de la violación sexual en los mayores de 14 a 17 años?
 - a) Trata de personas
 - b) Baja cultura moral
 - c) Enfermedad psiquiátrica
 - d) Conflicto

4. ¿Cuál considera Ud. que son las causas más comunes que dan origen a una denuncia por violación sexual?
- a) Difamación
 - b) Conflicto familiar
 - c) Baja cultura moral
 - d) Extorsión
5. ¿Cuál considera Ud. que son Las causas más comunes en las sentencias absolutorias por violación sexual en mayores de 14años?
- a) Retracto de la victima
 - b) No declaración de la víctima en juicio oral
 - c) Negarse a pasar el re-conocimiento médico legal
 - d) La falta de elementos periféricos
6. ¿Cuál considera Ud. que son las causas más comunes para prolongar una prisión preventiva hasta por 18 meses en las denuncias por violación sexual?
- a) Complejidad de actos de investigación
 - b) Pericias necesarias
 - c) Demora de las pericias
 - d) Falta de colaboración del imputado
7. ¿Cuál considera Ud. que son las causas para declarar fundado una prisión preventiva hasta por 9 meses en las denuncias por violación sexual?
- a) Fundados y graves elementos de convicción estigma o etiquetamiento
 - b) Condición económica
 - c) Edad del agente
 - d) Gravedad de la pena
8. ¿Cuál considera Ud. que son las causas más comunes para dicta una sentencia absolutoria con prisión preventiva de las denuncias por violación sexual?
- a) Consentimiento
 - b) Conflictos en la relación
 - c) Condición económica
 - d) Edad del agente

9. ¿Considera Ud. que es el acto sexual consentido es causal para una sentencia absolutoria?

- a) Siempre
- b) Casi siempre
- c) Algunas veces
- d) Pocas veces
- e) Nunca

10. ¿Cuál considera Ud. que la causa más común para una sentencia absolutoria por acto sexual por denuncia injustificada?

- a) Celos
- b) Infidelidad
- c) Honor
- d) Difamación
- e) Conflictos personales



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
TRANSITORIA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

1.º SALA PENAL

R. N. N.º 2717-2016
LORETO



**Nulidad de sentencia
condenatoria**

Sumilla. La sentencia impugnada deviene en nula, por cuanto se han valorado medios de prueba llevados a cabo en un juicio oral quebrado.

Lima, veintiuno de junio de dos mil diecisiete

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del encausado Jorge Luis Ozambela Pizango contra la sentencia de fojas mil veintitrés, del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, expedida por la Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Loreto; en el extremo que lo condenó como autor del delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor de iniciales J. C. P. M., de doce años de edad al momento de los hechos; y del delito contra la Libertad, en la modalidad de proxenetismo (usuario-cliente), en perjuicio de la menor de iniciales H. K. R. A., de catorce años de edad al momento de los hechos; y le impusieron treinta años de pena privativa de libertad y el pago de cuatro mil soles por concepto de reparación civil que deberá abonar a favor de cada una de las agraviadas.

Interviene como ponente la señora jueza suprema Barrios Alvarado.

CONSIDERANDO

PRIMERO. AGRAVIOS FORMULADOS

La defensa técnica del encausado Jorge Luis Ozambela Pizango, al fundamentar su recurso de nulidad, de fojas mil sesenta y tres, sostiene medularmente lo siguiente:



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
TRANSITORIA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

1.º SALA PENAL

R. N. N.º 2717-2016
LORETO



I) La sentencia materia de impugnación ha infringido el principio del debido proceso, pues no se ha realizado una correcta apreciación de las pruebas producidas en el proceso, ya que la condena se sustenta únicamente en la declaración de la menor de iniciales H. K. R. A., sin que esta cumpla con los requisitos exigidos por el Acuerdo Plenario N.º 02-2015/CJ-116.

II) Se vulneraron los principios de necesidad de la prueba y presunción de inocencia, puesto que no existe prueba suficiente directa para sustentar la condena.

III) Era necesaria una mejor valoración de los actuados, precedida de una actividad probatoria razonable que permita establecer de manera concreta la culpabilidad del recurrente, tanto más en el contexto de un delito de gravedad como lo es el de violación sexual, por lo que debieron efectuarse diversas actividades probatorias.

IV) El certificado médico legal no tiene valor probatorio, ya que no contiene una anamnesis médico forense o sumario interrogatorio sobre la naturaleza del caso, ha sido suscrito por un solo perito y no por dos como lo establece la Guía Médico Legal de evaluación física de la integridad sexual (por lo que no se cumple con perennizar el reconocimiento médico legal a través de fotografías o videos), y no se sometió a examen pericial al médico legista, a fin de garantizar el derecho de defensa.

SEGUNDO. TÉRMINOS DE LA IMPUTACIÓN

Conforme se aprecia en la acusación fiscal, de fojas trescientos setenta y cinco, se imputa a Jorge Luis Ozambela Pizango, alias "el Huevero", haber tenido acceso carnal, vía vaginal, con las menores identificadas con las iniciales J. C. P. M. y H. K. R. A., de doce y catorce años de edad al momento de los hechos, respectivamente, el veintidós de abril de dos mil



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
TRANSITORIA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

1.ª SALA PENAL

R. N. N.º 2717-2016
LORETO



doce cuando estas se encontraban por las inmediaciones de la Prolongación Requenillo con dirección al bar Latin Lover, adonde llegaron cerca de las veintitrés horas con treinta minutos.

En el lugar se encontraron con el inculcado, quien preguntó a la menor de iniciales J. C. P. M. cuánto cobraba por sus servicios sexuales; a la vez que intentaba tocarle los senos. Luego de ello también le preguntó si tenía una amiga, por lo que le presentó a la menor de iniciales H. K. R. A.

Luego de ello, el encausado se dirigió al hospedaje Sadicita II con ambas menores, donde al no encontrar cuartos disponibles se fueron al recreo El Campín, ubicado en el Aeropuerto de dicha ciudad, donde mantuvieron relaciones sexuales. Cada menor recibió a cambio la suma de ochenta y cincuenta nuevos soles, respectivamente.

Retornaron al bar Latin Lover y aproximadamente a la una de la madrugada del día siguiente se encontraron con el inculcado Jackson Luis Pacaya Tamani, conocido como "Pandora" (homosexual), quien informó a ambas menores que tenían un cliente. Este resultó ser el encausado con quien se dirigieron al recreo El Campín a tener relaciones sexuales, por segunda vez, a cambio de la suma de treinta nuevos soles cada una.

FUNDAMENTOS

TERCERO. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional¹, las pruebas actuadas en el proceso penal deben ser valoradas de manera adecuada y con la debida motivación, con el propósito de darle el mérito probatorio que tengan en la sentencia y el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.

¹ Véase por todas las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, las siguientes causas: Exp. N.º 06712-2005-HC/TC, de fecha 17-10-2005, fundamento jurídico N.º 15; y Exp. N.º 1014-2007-HC/TC, del 05-04-2007, fundamento jurídico N.º 10.



En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben explicar en modo suficiente las razones que sustentan su fallo, las mismas que deben provenir del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso concreto, de modo que sea posible conocer el sustento fáctico y el razonamiento en virtud de los cuales absuelve o condena a un inculcado. Esto constituye, a su vez, un principio constitucional y un derecho que permite a las partes procesales comprobar si la respuesta dada al caso concreto deviene de una actividad racional adecuada y apoyada con lo actuado en el proceso, y no resultado de la arbitrariedad judicial.

CUARTO. El Colegiado Superior condenó al recurrente como autor de los delitos de violación sexual de menor de edad y proxenetismo (usuario cliente) y señaló que no puede utilizar la información de las diligencias preliminares, como las manifestaciones de las menores agraviadas y reconocimientos fotográficos, practicados con presencia del representante del Ministerio Público, por haber sido realizados sin garantía del derecho de contradicción del procesado Ozambela Pizango y valoró actuaciones judiciales llevadas a cabo en juicio oral quebrado.

QUINTO. El objetivo general de proteger el principio de interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. Así, el artículo 19 de la Convención Americana de los Derechos Fundamentales señala: "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado". Conforme con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño se entiende por niño a todo ser humano desde su nacimiento hasta los



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
TRANSITORIA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

1.º SALA PENAL

R. N. N.º 2717-2016
LORETO



dieciocho años de edad, quien debe estar protegido contra toda forma de discriminación por causa de sus autoridades.

Igualmente, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, señala en el artículo ocho que se deben adoptar medidas adecuadas para proteger en todas las fases del proceso penal, los derechos e intereses de los niños víctimas de prácticas prohibidas y reconocer su vulnerabilidad.

SEXTO. Desde la perspectiva procesal, igualmente, al recurrente se le reconocen derechos y garantías. En cuanto a la actuación probatoria, esta se encuentra sujeta a lo establecido en los artículos 229, 232 y 237 del Código de Procedimientos Penales; ello es que la prueba a actuar en el juicio oral solo puede ser llevada a cabo con el respeto de las reglas de su admisión, y queda vedado valorar aquello que no ha sido sometido a contradictorio, pues la "sorpresa" en la valoración de actuación judicial que no ha sido sometida a conocimiento y debate de las partes afecta la garantía del debido proceso.

SÉPTIMO. En el presente, revisten gravedad los hechos incriminados y el contexto en que estos se realizaron, de ahí que frente a un acto de violación contra menores, las autoridades deben llevar adelante el proceso con determinación y eficacia, sin violentar las reglas del proceso, pues no es posible juzgar a costa de todo, ya que tenemos obligaciones importantes dentro del sistema de justicia: el deber de debida diligencia en la investigación y sanción y la aplicación adecuada del marco jurídico de protección.



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
TRANSITORIA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

1.º SALA PENAL

R. N. N.º 2717-2016
LORETO



OCTAVO. En el juicio oral llevado a cabo se advierte que el Colegiado Superior:

- I) Valoró la actuación probatoria de un juicio oral quebrado, como la declaración de la menor de iniciales H. K. R. A., la confrontación de esta con el recurrente y la declaración testimonial de Karla Vanessa del Pilar Ávalos, llevadas a cabo en la audiencia de fecha trece de agosto de dos mil catorce de fojas quinientos veintiséis que constituyeron una evaluación sorpresiva para el imputado, pues ni se ofreció, actuó o dio lectura.
- II) Se descartó valorar las declaraciones de las menores H. K. R. A. y J. C. P. M. a nivel policial, en presencia del representante del Ministerio Público, bajo el argumento de que no participó el abogado defensor del procesado y, contradictoriamente, en la sentencia se señaló que la manifestación policial de la primera de las mencionadas otorga verosimilitud de su relato, cuando antes la había descartado por llevarse sin la garantía del contradictorio del recurrente, lo que evidentemente es una afectación a la debida motivación de una decisión judicial.

En consecuencia, se ha incurrido en causal de nulidad insalvable, por lo que amerita un nuevo juicio oral donde deberá considerarse lo estatuido en los considerandos quinto y sexto de la presente ejecutoria y lo siguiente:

- a) Cuando se trata de delitos sexuales en perjuicio de una mujer (niña o adulta) es de rigor tener en cuenta aquellos factores que puedan ocasionar su revictimización. En tal sentido, debe orientar el juzgador



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
TRANSITORIA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

1.º SALA PENAL

R. N. N.º 2717-2016
LORETO



su actuación judicial a que la declaración de la víctima sea única, salvo los supuestos advertidos en el Acuerdo Plenario número 1-2011/CJ-116 sobre la apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual.

- b) No es necesaria la declaración de la víctima en juicio oral, cuando en etapa previa esta, con la garantía de Ley, brindó su declaración, pues la misma puede ser oralizada y sometida a contradicción en el plenario.

Asimismo, de modo complementario, deben recabarse las pruebas pertinentes y las que ofrezcan las partes; diligencias que resultan ser necesarias e imprescindibles a efectos de que el Tribunal Superior realice un adecuado juicio respecto a los cargos inculcados al procesado Ozambela Pizango y se evalúen las sindicaciones esgrimidas contra él, así como los argumentos exculpativos de este.

Por consiguiente, es de rigor anular la sentencia venida en grado; y se dispone la realización de un nuevo juicio oral por otra Sala Penal, en aplicación del artículo doscientos noventa y ocho, inciso uno, del Código de Procedimientos Penales.

NOVENO. Finalmente, respecto de la medida cautelar personal, se advierte que la medida de comparecencia con restricciones debe recobrar vigencia para el nuevo juzgamiento, por lo que se debe disponer la inmediata libertad del recurrente Jorge Luis Ozambela Pizango.

DECISIÓN



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
TRANSITORIA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

1.ª SALA PENAL

R. N. N.º 2717-2016
LORETO



Por estas razones, con lo expuesto en el dictamen del Fiscal Supremo en lo Penal, declararon: **NULA** la sentencia de fojas mil veintitrés, del dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, expedida por la Sala Penal Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Loreto; en el extremo que condenó a Jorge Luis Ozambela Pizango como autor del delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor de iniciales J. C. P. M., de doce años de edad; y del delito contra la Libertad, en la modalidad de proxenetismo (usuario-cliente), en perjuicio de la menor de iniciales H. K. R. A., de catorce años de edad; y le impusieron treinta años de pena privativa de libertad y el pago de cuatro mil soles por concepto de reparación civil que deberá abonar a favor de cada una de las agraviadas, con lo demás que al respecto contiene.

MANDARON se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, donde se tengan en cuenta los considerandos expuestos en la presente ejecutoria. **ORDENARON** la inmediata libertad del encausado Jorge Luis Ozambela Pizango, siempre y cuando no exista en su contra mandato de detención emanado por autoridad competente. En consecuencia: **OFÍCIESE** vía fax, a fin de concretar la libertad del imputado, a la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Loreto. **DISPUSIERON** se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley. Hágase saber a las partes apersonadas en esta Sede Suprema.

S. S.

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

SALAS ARENAS

BARRIOS ALVARADO



PODER JUDICIAL
DEL PERÚ

CORTE SUPREMA
TRANSITORIA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

1.º SALA PENAL

R. N. N.º 2717-2016
LORETO



PRÍNCIPE TRUJILLO

BA/ahp



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.º 842 – 2016
SULLANA

Proceso inmediato y flagrancia delictiva

Sumilla. i) Es verdad que el auto que dispuso que se siga con el proceso inmediato no fue recurrido por el imputado, pero no se puede sostener que operó la preclusión y, por tanto, ya no se puede cuestionar en las demás etapas procesales. La convalidación u saneamiento procesales no caben cuando el vicio procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable, que comprometen derechos y garantías fundamentales, sino únicamente cuando se observan las formalidades previstas en la Ley para el desarrollo de un acto procesal. ii) El proceso inmediato se estimó porque el encausado fue detenido en flagrancia, empero por tratarse de un proceso que restringe plazos procesales y elimina o reduce fases procesales la interpretación de las normas que lo autorizan debe ser restrictiva, es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del texto legal. En el presente caso, los policías captadores no presenciaron la comisión del delito, tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella. Lo cierto es que el delito no puede calificarse como flagrante. En consecuencia, se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS; en audiencia privada: el recurso de casación por quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la defensa del encausado MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ contra la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, de veintidós de junio de dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas treinta y tres, de quince de febrero de dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A. a cadena perpetua y tratamiento terapéutico, así como al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.



Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. Que por escrito de fojas una el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Sullana, culminada la investigación preparatoria, formuló acusación contra Maximiliano Benites Rodríguez por delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A., de siete años de edad. El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana mediante auto de fojas diecinueve, de veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, declaró la procedencia del juicio oral bajo los trámites del proceso especial inmediato.

SEGUNDO. Que los hechos declarados probados en las sentencias de instancia son los siguientes:

- A.** El día diecinueve de enero de dos mil dieciséis, como a las once de la mañana, en circunstancias que la menor agraviada de iniciales M.B.A.A., de siete años de edad, se encontraba sola en su domicilio, ubicado en el caserio Mallares, Calle Sáenz Peña - Sullana, llegó al mencionado inmueble el encausado Benites Rodríguez -vestía uniforme de ENOSA, camisa azul con pantalón jean azul y zapatos negros- para reconectar la luz eléctrica. Al advertir que la menor se encontraba sola, le pidió que verifique la luz. En ese momento, sin embargo, la agarró de los brazos, le dio un beso en la boca y luego la soltó, pero nuevamente le solicitó que prendiera la luz y la volvió a tomar de los brazos, así como a tocarle todo su torso, meter su mano dentro del short de tela que tenía puesto e introducir un dedo dentro de su vagina, el mismo que le produjo lesiones traumáticas genitales en la mucosa introito vaginal.
- B.** Al día siguiente, veinte de enero de dos mil dieciséis, aproximadamente a las nueve horas -luego de veintidós horas de ocurrido el hecho-, en circunstancias que la menor agraviada y su madre Mercedes Albuquerque Roa de Albán se dirigían en un vehículo policial, conjuntamente con tres efectivos policiales, a la Segunda Fiscalía Provincial de Sullana, esta última observó al encausado cuando se desplazaba por la carretera Panamericana Norte en una motocicleta, por lo que, ante la sindicación de la madre de la agraviada, la policía detuvo al imputado Benites Rodríguez.



TERCERO. Que, en lo relevante desde la perspectiva procedimental, se tiene que con fecha veinte de enero de dos mil dieciséis el Fiscal Provincial formuló requerimiento de incoación de proceso inmediato, el cual fue declarado procedente por auto –no impugnado– de fojas doce, de veintiuno de enero de dos mil dieciséis. En la misma audiencia única de incoación del proceso inmediato, el Fiscal solicitó mandato de prisión preventiva contra el citado encausado Benites Rodríguez, que el Juez de la Investigación Preparatoria por auto de fojas trece, de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, declaró fundado y por un plazo de cinco meses.

Seguida la causa conforme a sus respectivas reglas de procedimiento, mediante sentencia de fojas treinta y tres, de quince de febrero de dos mil dieciséis, se condenó al acusado Benites Rodríguez como autor del delito de violación sexual de menor de edad a la pena de cadena perpetua. Este fallo fue confirmado por sentencia de vista de fojas doscientos cinco, de veintidós de junio de dos mil dieciséis.

CUARTO. Que la defensa del encausado Benites Rodríguez en su recurso de casación de fojas ciento doce, de quince de julio de dos mil quince, introduce como motivos los de inobservancia de precepto constitucional y quebramiento de la garantía de motivación (artículo 429, incisos 1 y 4, del Código Procesal Penal).

Alega que se tramitó la causa en la vía inmediata como si se tratase de un supuesto de flagrancia delictiva, que no corresponde, y, en consecuencia, se afectó el derecho de defensa de su patrocinado. Afirma que la flagrancia no opera cuando es un tercero quien sindicó al presunto autor, más aún si la detención ocurrió con posterioridad a los hechos aunque antes de las veinticuatro horas de su presunta comisión. Acota que se interpretó extensivamente el artículo 259, apartado 3, del Código Procesal Penal y que la legalidad del procedimiento debió ser sostenida por el Fiscal y el Juez. De otro lado, apunta que la sentencia de vista incurrió en motivación deficiente porque no incorporó razones acerca de la ausencia de flagrancia delictiva y de la consiguiente arbitrariedad del arresto policial.

QUINTO. Que cumplido el trámite de traslados a las partes recurridas, este Tribunal de Casación, por Ejecutoria Suprema de fojas cuarenta y ocho, de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, del cuadernillo formado en esta instancia Suprema, declaró bien concedido el citado recurso, aunque –en aplicación de la concepción de la “voluntad impugnativa”– exclusivamente



por la causal de quebrantamiento de precepto procesal (artículo 429, apartado 2 del Nuevo Código Procesal Penal), a fin de examinar la legalidad de la incoación del proceso inmediato y la corrección jurídica del procedimiento subsiguiente.

SEXTO. Que instruido el expediente en Secretaría, señalada fecha para la audiencia de casación el nueve de marzo del presente año, realizada esta con la concurrencia de la abogada defensora del encausado, doctora Mercedes Herrera Guerrero, y del señor Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal, doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, el estado de la causa es la de expedir sentencia.

SÉPTIMO. Que deliberada la causa en secreto y votada el mismo día, se acordó por unanimidad dictar la correspondiente sentencia de casación en los términos que a continuación se consignan. Se programó para la audiencia de lectura de la sentencia el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Que, como ha quedado establecido en los fundamentos de hecho de la presente sentencia, es del caso determinar si se interpretó y aplicó correctamente los presupuestos legales que rigen la incoación del proceso inmediato reformado, previstos en el artículo 446 del Código Procesal Penal; y, por tanto, si correspondía dilucidar los cargos contra el encausado Benites Rodríguez en un proceso célere y abreviado como el inmediato.

Es verdad que el auto que, aceptando el requerimiento de la Fiscalía Provincial, dispuso se siga la causa en la vía inmediata, no fue recurrido por el imputado. Sin embargo, no es posible sostener como regla jurídica pétrea que operó la preclusión de ese momento procesal y, por tanto, que tal declaración jurisdiccional ya no se puede cuestionar en las demás etapas procesales. Cuando se cuestiona sostenidamente –en apelación y casación de las sentencias de mérito– la licitud de la concreta incoación del proceso inmediato, en el que se compromete una garantía constitucional, vinculada al debido proceso, como es la “interdicción de ser desviado de la jurisdicción determinada por la ley”, a que hace mención el segundo párrafo del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución, no es de recibo aceptar el principio de convalidación por omisión de cuestionamiento en el momento en que se advirtió su infracción. La convalidación y el saneamiento procesales no caben cuando el vicio procesal configura una nulidad absoluta o insubsanable, que



comprometen derechos y garantías fundamentales (artículo 150, literal 'd', del Código Procesal Penal), sino únicamente cuando no se observan las formalidades previstas en la Ley para el desarrollo de un acto procesal –se circunscribe a los defectos no absolutos–.

SEGUNDO. Que, según el auto de incoación del proceso inmediato de fojas doce, de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se declaró procedente ese proceso especial porque se estimó que el imputado Benites Rodríguez fue detenido en flagrancia delictiva. La Fiscalía Provincial acompañó a estos efectos la denuncia verbal, la declaración de la víctima y de su madre, la declaración del imputado –quien negó los cargos–, actas de reconocimiento en rueda, fotografías, documentos y actas de inspección [requerimiento fiscal de fojas siete, de veinte de enero de dos mil dieciséis].

Es de precisar, como dato esencial, el mérito del acta denominada de “intervención policial”, de fecha veinte de enero de dos mil dieciséis, acompañada por el recurrente en esta sede y al que las sentencias de mérito han hecho mención. Allí se indica que cuando la menor agraviada, su madre y personal policial en una unidad policial se dirigían a la Fiscalía Provincial de Sullana, “...la madre de la menor logró visualizar al presunto autor del delito contra la libertad sexual (actos contra el pudor), quien se desplazaba por la carretera Panamericana Norte [...] en un vehículo menor [...], siendo intervenido e identificado tratándose de la persona de Maximiliano Benites Rodríguez...”.

En la sentencia de primera instancia, resumiendo la declaración de la madre de la agraviada, se anotó que “lo reconoce porque su hija le dio las características...; estaba vestido con ropa azul y en la moto roja al momento en que ella lo observó”. Asimismo, en la audiencia del juicio oral de cinco de febrero de dos mil dieciséis, se ratifica la forma cómo se identificó, quién lo hizo y la detención policial consiguiente: estelar, en esa intervención, fue la declaración de la denunciante Mercedes Alburquerque Roa de Albán.

Estos son los hechos procesales relevantes y definidos en las sentencias de mérito. Por ende, sobre esa base es que debe examinarse si correspondía o no el proceso inmediato y si en su actuación se vulneraron derechos básicos de carácter procesal del imputado, al punto que las sentencias de condena emitidas no pueden sostenerse por carecer de eficacia procesal.

TERCERO. Que el artículo 446, numeral 1), literal a), del Código Procesal Penal, estatuye que el proceso inmediato procede cuando, entre otros supuestos, “el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera



CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA

CASACIÓN N.º 842 – 2016/SULLANA

de los supuestos del artículo 259". La norma de remisión (artículo 259 del citado Código), en el inciso tercero, dispone que existe flagrancia, y permite la detención por la Policía, cuando: "3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, [...], y es encontrado dentro de las veinticuatro (24) horas producido el hecho punible".

En estos casos, como es obvio por tratarse de un proceso que restringe plazos procesales y elimina o reduce fases procesales –la flagrancia, como institución procesal, tiene un objetivo instrumental para facilitar la actuación de la autoridad policial o para instituir procedimientos simplificados y céleres–, la interpretación de las normas que lo autorizan, por sus efectos, debe ser restrictiva, es decir, dentro de la esfera de su ordenamiento, en el núcleo de su representación o significación del texto legal.

CUARTO. Que la flagrancia es una institución procesal de carácter instrumental o medial, a cuyo amparo se autoriza que la autoridad penal pueda realizar determinados actos de limitación de derechos fundamentales (medidas de coerción o medidas instrumentales restrictivas de derechos) con fines de investigación del delito y, en su caso, poder instaurar procedimientos simplificados que dan lugar a una decisión célere. El delito flagrante es lo opuesto al delito clandestino; y, como tal, debe cometerse públicamente y ante testigos. Requiere que la víctima, la policía o un tercero presencien la comisión del delito en el mismo momento en que se perpetra (evidencia o percepción sensorial del hecho delictivo), y que ante la realización de la infracción penal surja la necesidad urgente de la detención del delincuente para poner coto a la comisión delictiva, cortar o evitar mayores efectos lesivos de la conducta delictiva o impedir la fuga del delincuente. La inmediatez que ello implica hace patente el hecho delictivo –la flagrancia se ve, no se demuestra– y su comisión por el detenido, de suerte que como existe una percepción directa y sensorial del delito, excluye de por sí toda sospecha, conjetura, intuición o deducción. Se asume, por ello, que todos los elementos del hecho están presentes y que no cabe elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación del detenido (Acuerdo Plenario número 2-2016/CJ-116, fundamento jurídico 8-A, de uno de junio de dos mil dieciséis).

Lo últimamente expuesto, de uno u otro modo, se recoge en el citado artículo 259, apartado 3 del Código Procesal Penal, más allá de la dudosa extensión en la captura del delincuente de hasta veinticuatro horas después del hecho



delictivo. Se trata de la denominada *cuasi flagrancia*, en cuya virtud el delincuente, sorprendido en plena comisión del hecho punible o cuando inmediatamente acaba de cometerlo –pero siempre en el mismo teatro de los hechos–, por diversos factores o circunstancias, logra huir de la escena del delito, no obstante lo cual ha sido reconocido o identificado por la propia víctima, por la policía o, en todo caso, por un testigo presencial –este último puede ser el acompañante del agraviado o un tercero que se encontraba por el lugar de los hechos–.

Ser testigo presencial del delito –verbigracia: víctima, policía, sereno u otra persona– importa que directamente y a través de sus sentidos expone acerca de lo que observó y esta observación está referida, precisamente, a la comisión de un delito. No cumple con este requisito la institución del testigo de oídas o de referencia, pues solo puede mencionar lo que alguien le contó acerca de un suceso determinado –su información es indirecta, la obtiene a través de manifestaciones o confidencias de terceras personas [*Diccionario del Español Jurídico*, RAE-CGPJ, Madrid, 2016, páginas 1575/1576]–; y, por tanto, en tanto prueba indirecta –al no haber sido percibidos los hechos con sus sentidos–, su información debe ser contrastada por el testigo fuente, que sería el presencial.

Cabe acotar, desde ya, por su carácter de medio de prueba subsidiaria, sirve (i) para identificar a la persona que realmente tiene conocimiento directo de las circunstancias sobre las que declara, (ii) para valorar la credibilidad y fiabilidad de otro testigo –presencial o de referencia inclusive–, o (iii) para probar la existencia o no de corroboraciones periféricas –por ejemplo, para coadyuvar a lo que sostiene el testigo único– (SSTSE de treinta de abril de dos mil trece y de treinta de septiembre de dos mil dos).

QUINTO. Que, en el presente caso, los policías captores no presenciaron la comisión del delito. Tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella.

Con independencia de lo que mencionó la niña agraviada y del valor probatorio que puede otorgársele a su testimonio, lo cierto que el delito *sub-judice* no puede calificarse de flagrante. Nadie, excepto la propia víctima, presenció la violación que ha sido objeto de denuncia, procesamiento, acusación, enjuiciamiento y sentencia. Ni siquiera se recogió en ese acto, o inmediatamente después, algún vestigio material. Todo queda circunscripto al relato directo de la víctima, a la versión de oídas de sus familiares –que



afronta una problemática en orden a su veracidad y credibilidad–, y a la negativa del imputado, sin perjuicio de la prueba pericial recabada.

Un caso como el aludido requiere de un elaborado análisis deductivo, de un riguroso análisis de la versión de la víctima, y de una actividad probatoria variada o diversa, tanto más (i) si no se cuenta con vestigios materiales y fluidos corporales examinados pericialmente, (ii) si la captura no se produjo en el mismo momento o instantes después de sucedido el hecho delictivo –a las veintidós horas del mismo, al día siguiente–, y (iii) si el imputado niega los cargos, quien incluso está en la posibilidad de ofrecer, desde la perspectiva de un procedimiento más extenso, prueba documental y personal de descargo.

Por lo demás, se está ante un delito especialmente grave, que está asociado a la pena más grave del sistema penal: cadena perpetua, por lo que por razones de estricta proporcionalidad no puede solventarse, sin prueba evidente derivada de la flagrancia, en un proceso célere y reducida actuación probatoria, como el inmediato (Acuerdo Plenario número 2-2016/CIJ-116, fundamento jurídico 10, de uno de junio de dos mil dieciséis).

SEXTO. Que, en consecuencia, se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común, derivándolo irrazonablemente al proceso inmediato. Se vulneró, en tal virtud, el artículo 139, apartado 3, 2do párrafo, de la Constitución, y al infringirse el artículo 466, apartado 1), literal a) del Código Procesal Penal, se incurrió en la causal de nulidad prevista en el artículo 150, literal d), del aludido Código. Ello determina a su vez que debe ser amparada la causal de casación procesal establecida en el inciso 2) del artículo 429 del Código citado.

La nulidad incurrida por ser absoluta es insubsanable. No cabe saneamiento ni convalidación, pues no se trata de una mera inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino de una auténtica lesión al debido proceso legal desde la perspectiva del procedimiento legal preestablecido que determine una retroacción de actuaciones radical. Como no se trata de un mero incidente de nulidad de actuaciones –que, por lo demás, ha de ser interpuesto en la instancia respectiva–; y, dado que la pretensión impugnativa está dirigida contra todo el procedimiento y, señaladamente, contra las sentencias de mérito, lo que único que se exige es que se plantee adecuadamente como un motivo impugnativo puntual –que es lo que se ha hecho–. Por lo demás, los efectos lesivos del procedimiento incoado y de las sentencias emitidas son evidentes: plazos breves, eliminación de fases procesales, y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa, con el tiempo razonable que requieren delitos no flagrantes.



SÉPTIMO. Que, de otro lado, en los marcos de la petición impugnativa se solicita que la nulidad alcance al mandato de prisión preventiva y, por tanto, que se dicte la inmediata libertad del imputado Benites Rodríguez.

Sobre el particular es de rigor puntualizar lo que estableció el Acuerdo Plenario número 2-2016/CJ-116, fundamento jurídico 23-D, de uno de junio de dos mil dieciséis. La desestimación de la incoación del proceso inmediato no trae consigo necesariamente la anulación de la prisión preventiva; y, la modificación de esta medida de coerción personal, requiere petición de parte, unida a un debate sobre los presupuestos materiales correspondientes.

Empero, lo que es singular en el presente caso es el tiempo de privación procesal de la libertad: ya alcanza cerca de los catorce meses. Como el plazo ordinario de la prisión preventiva, en estos casos, es de nueve meses (artículo 272, apartado 1 del Código Procesal Penal), es evidente que ya venció (se dictó el veinte de enero de dos mil dieciséis) –no cabe tomar en cuenta la mitad de la pena impuesta, porque la consecuencia de amparar el recurso de casación es la anulación de las sentencias de mérito, luego, la causa debe retrotraerse a la etapa de investigación preparatoria–. Rige para esta solución, el artículo 273 del citado Código, que es del caso aplicar.

DECISIÓN

Por estas razones: **I. Declararon FUNDADO** el recurso de casación por quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la defensa del encausado MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ, contra la sentencia de vista de fojas ochenta y tres, de veintidós de junio de dos mil dieciséis, que confirmando la sentencia de primera instancia de fojas treinta y tres, de quince de febrero de dos mil dieciséis, lo condenó como autor del delito de violación sexual de menor de edad en agravio de M.B.A.A. a cadena perpetua y tratamiento terapéutico, así como al pago de cinco mil soles por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene. En consecuencia: **NULA** la sentencia de vista recurrida e **INSUBSISTENTE** la sentencia de primera instancia; y, reponiendo la causa al estado que le corresponde: declararon **SIN EFECTO** todo lo actuado en esta causa desde el auto de incoación del proceso inmediato de fojas doce, de veintiuno de enero de dos mil dieciséis, inclusive, sin perjuicio de la validez de la prueba documental, los informes o dictámenes periciales, las diligencias objetivas e irreproducibles, y, en lo pertinente, de las actas que contienen las diligencias preliminares.



II. ORDENARON se siga la causa conforme al proceso común y se remitan los actuados a la Fiscalía Provincial para la emisión de la Disposición de Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria.

III. DECRETARON la inmediata libertad del encausado MAXIMILIANO BENITES RODRÍGUEZ por vencimiento del plazo de duración de la prisión preventiva; y, de conformidad con el artículo 273 del Código Procesal Penal, **ESTABLECIERON** que el citado encausado (i) no se comuniquen con la agraviada y su familia; (ii) no se ausente de las provincias de Sullana y Piura sin autorización del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria competente; y, (iii) se presente el último día hábil de cada mes al referido Juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; oficiándose a quien corresponda para su excarcelación, que se ejecutará siempre y cuando no exista mandato de detención o prisión preventiva emanado de autoridad competente.

IV. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a todas las partes personadas en esta sede Suprema.

V. MANDARON que cumplidos estos trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuadernillo de casación en esta Suprema Corte. Intervienen las señoras Juezas Supremas Luz Sánchez Espinoza y Zavina Chávez Mella por vacaciones de los señores Jueces Supremos Victor Prado Saldarriaga y Jorge Luis Salas Arenas, respectivamente.

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

SÁNCHEZ ESPINOZA

CHÁVEZ MELLA

CSM/mt

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIAB.	DIMENSION	TECNICAS/ INSTRUMENTOS	NIVEL / DISEÑO DE INVESTIGACION
<p>GENERAL ¿Cuál es la relación existente entre el proceso de violación sexual y la transgresión del “principio de presunción de inocencia” en la provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016?</p> <p>Problemas Específicos. ¿Cuáles son las causas del proceso por el delito de violación sexual que generan la transgresión del principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016?</p> <p>¿De qué manera el proceso por el delito de violación sexual transgrede el principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016?</p>	<p>GENERAL Determinar cuál es la relación que existe entre proceso de violación sexual y la transgresión del “principio de presunción de inocencia”, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.</p> <p>Objetivos Específicos. Identificar, cuáles son las causas del proceso por el delito de violación sexual que generan la transgresión del principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.</p> <p>Explicar de qué manera el proceso por el delito de violación sexual transgrede el principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.</p>	<p>GENERAL Existe relación significativa entre el proceso por el delito de violación sexual y la transgresión del “principio de presunción de inocencia” en el distrito judicial de la provincia de Coronel Portillo durante el año 2016.</p> <p>Hipótesis Específicas. Existen diversas causas para que el proceso por el delito de violación sexual genere transgresión del principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.</p> <p>El delito de violación sexual transgrede en gran medida el principio de presunción de inocencia, provincia de Coronel Portillo, durante el año 2016.</p>	<p>V. I Proceso de violación sexual</p> <p>V.D transgresión al principio de presunción de inocencia</p>	<p>Proceso por violación sexual de 10 a 15 años</p> <p>Proceso por violación sexual de 15 a 17 años</p> <p>Origen de una denuncia por violación sexual</p> <p>Causas de las sentencias absolutorias</p> <p>Obtención de la prueba plena</p> <p>Motivación de la sentencia</p> <p>Presunción de culpabilidad</p>	<p>TECNICAS Encuesta Análisis documental</p> <p>INSTRUMENTOS -Ficha de encuesta tipo cuestionario - Observación</p> <p>-Matriz de análisis</p>	<p>Nivel: Explicativo- Correlacional.</p> <p>Diseño: No experimental en su variante, transversal y longitudinal será transversal porque la investigación es de tipo descriptivo y explicativo</p>